



OFICINA DEL GOBERNADOR
PROPIA
AGO30'21PM5:01

INFORME MENSUAL
AL GOBERNADOR DE PUERTO RICO
HON. PEDRO R. PIERLUISI
en cumplimiento con la Orden Ejecutiva 2021-013

30 de agosto de 2021
San Juan, Puerto Rico



PREVENCIÓN | APOYO | RESCATE | EDUCACIÓN

COMITÉ CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CONTENIDO

- I. Alcance
- II. Reuniones Comité PARE
 - A. Reunión Ordinaria
 - B. Reuniones y eventos adicionales
- III. Progreso y Cumplimiento con OE 2021-013 y Plan de Acción

Anejos

I. Alcance

La Orden Ejecutiva 2021-013, promulgada el 25 de enero de 2021 por el Hon. Pedro R. Pierluisi, Gobernador de Puerto Rico, dispone en la Sección 14ta:

INFORMES DE CUMPLIMIENTO. El Comité PARE rendirá al Gobernador, un informe inicial sobre los trabajos realizados y las medidas a implementarse de forma inmediata para combatir la violencia de género, en cuarenta y cinco (45) días luego de la promulgación de esta Orden Ejecutiva. A partir de ese informe inicial, rendirá un informe mensual de los trabajos realizados y hará recomendaciones para atender el problema de la violencia de género. Conforme a nuestra política pública de garantizar la transparencia, los informes mensuales deberán hacerse disponibles al público en general.

Conforme a la anterior disposición de la Orden Ejecutiva (en adelante 2021-013), se somete el informe para el mes de agosto de 2021, sobre los trabajos del Comité PARE y los subcomités, para el periodo comprendido del 30 de julio al 30 de agosto de 2021.¹

II. Reuniones Comité PARE

A. Reunión Ordinaria

La reunión mensual del pleno del Comité PARE se llevó a cabo el 4 de agosto de 2021, en el Salón de Conferencias del Cuartel General del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

La agenda de la reunión incluyó, como asuntos principales:

- Desarrollo del Programa de Seguimiento para las Órdenes de Protección, y el proyecto en desarrollo del Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección (COPOP) del Negociado de la Policía de Puerto Rico;
- Evaluación de alternativas tecnológicas, para recomendar la aplicación para dispositivos móviles para solicitar asistencia;
- Plan de trabajo para la redacción, revisión y/o recomendaciones de los protocolos relacionados a violencia de género;

¹ Los Informes del Comité PARE están disponibles y accesibles en la página web, cuya dirección es parelaviolencia.pr.gov.

- Estatus del plan de trabajo recomendado por el componente del subcomité de Educación/Prevención/Capacitación, para la capacitación al personal del Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Pública, Departamento de la Familia, Departamento de Salud y Departamento de Corrección y Rehabilitación;
 - Progreso con el proceso de disponibilidad de los fondos del *Coronavirus Relief Fund* (CFR) para albergues en la página web de Comité PARE, y los respectivos formularios para la solicitud de estos fondos, conforme a la Resolución del Comité PARE del 21 de julio de 2021 y, las guías y normas aplicables al proceso.
- B. Reuniones y eventos adicionales para apoyar cumplimiento de las diversas secciones de la OE 2021-013 y el Plan de Acción para la Ejecución e Implantación del Estado de Emergencia
- 3 de agosto- Participación de la Presidenta del Comité PARE, la Dra. Carmen Ana González Magaz, y la Lcda. Ileana V. Espada, Oficial de Cumplimiento, en la Cumbre de Líderes para la Recuperación Académica del Departamento de Educación.

En la presentación se expuso sobre la Orden Ejecutiva 2021-013, los trabajos del Comité PARE, incluyendo la campaña mediática para la prevención, educación y combatir la violencia de género, las herramientas de la página web del Comité, y presentación de las personas integrantes del componente de Educación del subcomité de Educación/Prevención/Capacitación.

- 3 de agosto- Firma de Memorando de Entendimiento 2022-000053 entre la Administración de Vivienda Pública, el Departamento de la Familia, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y organizaciones integrantes del programa federal de Continuo de Cuidado PR 502, para facilitar la distribución de 203 vales del Programa federal de Sección 8 para personas víctimas de violencia de género o personas sin hogar.²
- 5 de agosto- Reunión virtual con la Monitora de Seguridad de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, para discutir potencial colaboración en áreas de prevención y educación.
- 6 de agosto- Capacitación/taller virtual para el Comité PARE y personal de las agencias integrantes ofrecido por la organización ILDA—Silvana Fumega (directora de Investigación y Políticas) y Hassel Fallas, sobre el tema de femicidios y estandarización de datos. El taller contó con la participación de 33 personas.

² Véase Anejo A: Memorandum of Understanding.

- 9 de agosto- Reunión con integrantes de la Comisión de la Verdad sobre la violencia de género del Colegio de Abogadas y Abogados, a invitación de su Presidenta, la Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, al Comité PARE, para conocer sobre los trabajos encaminados a base de la Orden Ejecutiva 2021-013.
- 17 de agosto- Reunión con la compañía Evertec, para presentar la Orden Ejecutiva 2021-013, la campaña mediática y página web del Comité PARE y, procurar y auscultar la potencial colaboración para aumentar la exposición de estas.
- 25 de agosto- Reunión con el coordinador regional de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, facilitada por el Observatorio de Equidad de Género, sobre el futuro lanzamiento y accesibilidad como herramienta de capacitación del curso en línea elaborado sobre del Modelo de Protocolo Latinoamericano de la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razón de Género.
- 27 de agosto- Reunión virtual con la Fundación del Banco Popular de Puerto Rico para exponer los trabajos en curso del Comité PARE, en función de la Orden Ejecutiva 2021-013, y evaluar potenciales áreas de apoyo y colaboración en atención al estado de emergencia decretado.
- 29 de agosto- Charla/Panel en actividad de Acuartelamiento de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, sobre la Orden Ejecutiva 2021-013 y la prevención, educación y manejo de casos de violencia de género. Las personas recursos del Comité PARE que facilitaron el panel lo fueron: Dra. Marilú Cintrón del Departamento de Salud; la Sgto. Ivette Rivera, del Negociado de la Policía de Puerto Rico; la Sra. Mireya Arroyo, Especialista de ADN del Instituto de Ciencias Forenses; y la Lcda. Ileana Espada, Oficial de Cumplimiento.

III. Progreso y Cumplimiento con OE 2021-013 y Plan de Acción

A. Vistas públicas

La Sección 6ta, inciso 2, de la Orden Ejecutiva 2021-013 dispone que el Comité PARE deberá realizar vistas públicas para recibir recomendaciones de todas las ramas de gobierno y todos los sectores de la sociedad, y discutir ideas y planes de trabajo para combatir la violencia de género. La participación de todos los sectores es crucial para una respuesta eficiente, coordinada y multisectorial.

En las vistas públicas se han integrado a representantes del sector gubernamental y no gubernamental, gobierno municipal, en diversas áreas como salud, acceso a la justicia,

albergues, seguridad, entre otras, como parte de la divulgación de los servicios disponibles para las personas víctimas y sobrevivientes de la violencia de género en todas sus manifestaciones.

A continuación, se exponen los datos relevantes y pertinentes a las dos (2) vistas públicas realizadas en el mes de agosto:

Quinta Vista Pública
miércoles, 18 de agosto
Región de Guayama/Barranquitas/Caguas

PARE
PREVENCIÓN | APOYO | RESCATE | EDUCACIÓN
COMITÉ CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

VISTA PÚBLICA
Región de Guayama-Barranquitas-Caguas

Miércoles, 18 de agosto de 2021

Centro de Bellas Artes de Caguas
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Invitamos a toda persona interesada a asistir y exponer ideas, recomendaciones
y/o planes de trabajo para combatir la violencia de género en Puerto Rico.

LIVE
@ComitéPARE

Puedes hacer una denuncia a través de:

parelaviolencia.pr.gov (787) 721-7000 Ext 3054 comitepare@fortaleza.pr.gov

La 5^{ta} vista pública se llevó a cabo el miércoles, 18 de agosto de 2021, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Los municipios comprendidos en esta vista fueron: Caguas, Gurabo, Comerío, Naranjito, Coamo, Villalba, Santa Isabel, Guayama, Juana Díaz, Arroyo, Barranquitas, Orocovis, Aibonito, Corozal, Patillas, Humacao, Salinas, Yabucoa, Naguabo, Maunabo, Las Piedras, San Lorenzo, Juncos, Cidra y Cayey.

Se contó con representación y/o ponencias de los municipios de Caguas—mensaje ofrecido por la Sra. Aida Ivette González Santiago, Secretaria de la Secretaría de Desarrollo Humano, en representación del alcalde, Hon. William Miranda Torres; la alcaldesa del municipio de Gurabo, Hon. Rosachely Rivera Santana; el alcalde del municipio de Comerío, Hon. José A. Santiago Rivera; y representación de los municipios de Villalba, Guayama, Juana Díaz, Corozal, Naranjito, Humacao, Yabucoa, Las Piedras, San Lorenzo, Juncos y Cidra. También se contó con la participación como deponente del Hon. Albert Torres Berríos, Senador por el Distrito de Guayama.

En la vista se recibieron 16 ponencias, entre estas, la ofrecida por Aida Ivette González Santiago, en representación de la Oficina de Asuntos de la Mujer del municipio de Caguas; la ponencia de la Hon. Rosachely Rivera Santana, alcaldesa del municipio de Gurabo, y de la Lcda. Ileana Valcourt, Silma Quiñones y Madeleine Vázquez; y la exposición del Hon. José A. Santiago Rivera, alcalde del municipio de Comerío, sobre el Programa de Apoyo y Fortalecimiento a Víctimas del Crimen.

A su vez, depusieron durante la vista la Sra. Joan Rivera Carrión y Vivian Arévalo Lozano, Directora de Operaciones y Líder de Relaciones Gubernamentales, respectivamente, del Boys and Girls Club de Puerto Rico; la Dra. Linda Laras del Centro Salud Justicia de Puerto Rico adscrito a la Escuela de Medicina San Juan Bautista; Alma Martínez Rivera, Directora Ejecutiva/Voluntaria del Proyecto CASA de Comerío/Bayamón; Lcda. Linette Rivera Maldonado de la Casa Juana Colón de Comerío; Marcos Santana Andújar, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud; Carenly Rivera del Hogar Nueva Mujer de Cayey; Jennifer Berríos de Casa Pensamiento de la Mujer en Aibonito; Widalis Rodríguez, Directora e Intercesora legal, y Jailene Nieves Alicea, Trabajadora Social, de la Oficina de Personas de Edad Avanzada y Asuntos de la Mujer/Programa CAPAZ del municipio de Naranjito; Gloria Vázquez, Directora de Casa de la Bondad en Humacao; Irmari Zayas de Mujer de Proyectos en Caguas; Raimari Cruz de la Corporación SANOS en Caguas; Edda Planadeball, Ayudante Especial del municipio de Guayama; Glamyr J. Moyett, Directora de la Oficina de Asuntos de la Mujer, y las Lcdas. Rose Nieves y Astrid Rivera, de la División Legal, del municipio de Humacao; la Profa. Luisa Seijo de Siempre Vivas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; la Sra. Jannette Rodríguez Robles, del Programa de Servicios de Antelación a Juicio, y Sra. Linda Morales, del Programa SAVER, ambos adscritos al Departamento de Corrección y Rehabilitación.³

Respecto al área de prevención, educación y respuesta multisectorial, como parte de los trabajos del Comité PARE y en función con la Orden Ejecutiva 2021-013, se contó con amplia participación de entidades de servicio y acceso a la justicia, gubernamentales y no gubernamentales.

³ Adicionalmente, se recibió la ponencia escrita de Elsa Nydia López Figueroa, de la Fundación Educación Comunitaria para el Desarrollo del Liderazgo de la Mujer, y dos escritos adicionales sometidos por correo electrónico por personas en su capacidad individual.

La vista pública se transmitió en vivo a través de la plataforma social de Facebook, y está disponible en la página web del Comité PARE. Conforme a los datos registrados por la plataforma—suministrados por el equipo de comunicaciones, la quinta vista pública alcanzó a 7,800 personas y 2,100 “views”.

Sexta Vista Pública
miércoles, 25 de agosto de 2021
Región de Fajardo, Vieques y Culebra

PARE
PREVENCIÓN | APOYO | RESCATE | EDUCACIÓN
COMITÉ CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

VISTA PÚBLICA
Región de Fajardo-Vieques-Culebra

miércoles, 25 de agosto de 2021

Centro de Usos Múltiples de Fajardo
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Invitamos a toda persona interesada a asistir y exponer ideas, recomendaciones y/o planes de trabajo para combatir la violencia de género en Puerto Rico.

LIVE
@ComitéPARE

Puedes hacer una ponencia a través de:

parelaviolencia.pr.gov ☎ (787) 721-7000 Ext 3054 ✉ comitepare@fortaleza.pr.gov

La 6^{ta} vista pública se llevó a cabo en el Centro de Usos Múltiples del municipio de Fajardo. Los municipios comprendidos en esta vista fueron Fajardo, Ceiba, Luquillo, Río Grande, Vieques y Culebra.

Se contó con representación y/o ponencias del municipio de Fajardo y su alcalde, Hon. José Aníbal Meléndez Méndez; y representantes de los municipios de Río Grande, Ceiba y Culebra. Entre los deponentes contamos con la exposición de la Sra. Jessica Espinoza González, Administradora Municipal del municipio de Culebra; la Sra. Dulce del Río de Mujeres de Islas, Culebra; la Sra. Lesbia Hernández del Proyecto Casa Elda de Fajardo; el

testimonio de una sobreviviente (solicitó fuese leído); la Profa. Luisa Seijo de Siempre Vivas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; la Dra. María Rebeca Ward y la Sra. Carmen Monge Martínez, del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV) del Departamento de Salud, y la Sra. Caribel Leyva del Centro de Servicios Integrados para Menores Víctimas de Abuso Sexual (CIMVAS) de Fajardo; la Sra. Linda Morales del Programa SAVER del Departamento de Corrección y Rehabilitación; y el Agte. José Varela del Negociado de la Policía de Puerto Rico.

En la vista, se contó con la participación de entidades de servicio y acceso a la justicia, gubernamentales y no gubernamentales, entre estas: Departamento de la Familia; Departamento de la Vivienda; Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; Departamento de Corrección y Rehabilitación; Servicios Legales de Puerto Rico; Servicio 9-1-1; Negociado de la Policía de Puerto Rico; ASSMCA; Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV); Casa Julia; Taller Salud; Proyecto Escudo del municipio de Ceiba; Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico; Programa Siempre Vivas, Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Como parte del programa, las agencias y organizaciones presentes expusieron cápsulas informativas sobre los servicios y programas disponibles y cómo pueden ser contactadas.

Conforme a los datos registrados por la plataforma—suministrados por el equipo de comunicaciones, la sexta vista pública alcanzó a 2,400 personas y 549 “views”.

La 7^{ma} vista pública—cerrando el ciclo de las vistas públicas que ofrecieron el espacio y oportunidad de escuchar ideas, recomendaciones, críticas y planes de trabajo de variados sectores de la sociedad a través de las regiones que abarcaron los 78 municipios, está programada para el 1 de septiembre en la región de Canóvanas-Carolina. Se llevará a cabo en el Centro de Usos Múltiples del municipio de Canóvanas, y comprende los municipios de Canóvanas, Carolina, Loíza y Trujillo Alto.

B. Campaña mediática y web page: grabación y difusión de “podcasts”

Como parte del desarrollo de la campaña mediática, se han grabado “podcasts” para concienciar sobre #ELMOMENTODELPARE, y dar a conocer los servicios que ofrecen las agencias y organizaciones no gubernamentales. Los “podcasts” que han sido grabados y publicados en la página web del Comité PARE incluyen a la Dra. Carmen Ana González Magaz, Presidenta del Comité PARE y Secretaria del Departamento de la Familia; el Dr. Julio Santana Mariño, integrante del Comité PARE en representación de la Academia; la Lcda. Ileana Espada, Oficial de Cumplimiento del Comité PARE; la Hon. Wanda del Valle, representante e integrante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico; la Ing. Frances Berríos, primera mujer Presidenta del Colegio de Peritos Electricistas; y la Lcda. Irma Rosado del Río, del Centro Integral de Ayuda a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

Así mismo, se han integrado a la página web una serie de videos para dar a conocer las organizaciones no gubernamentales y los servicios que ofrecen a las víctimas/sobrevivientes de la violencia de género; entre estos: Jennifer Berríos Rubert de Casa Pensamiento del Centro, en Aibonito; Lisdell Flores del Hogar Ruth; Romelinda Grullón del Centro de la Mujer Dominicana; Dra. Linda Laras del Centro Salud Justicia de Puerto Rico/Escuela de Medicina San Juan Bautista; Melissa Merced Gómez del municipio de Caguas; Erica Piñero del Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen (CAVIC) de la Universidad Interamericana; Profa. Luisa Seijo de Siempre Vivas, Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; Lcda. Valerie Rivera de la Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres del municipio de San Juan; y la Dra. Ángela Cruz, de “Tu Paz Cuenta” de Taller Salud.

C. Proyectos de ley

El subcomité de Política Pública y Legislación del Comité PARE sometió su recomendación favorable del P. del S. 130, para enmendar el Artículo 93(e) de la Ley 246-2014, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de definir el Femicidio y el Transfemicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado, enmienda las Secciones (2) y (3) de la Ley 157-2020, y para otros asuntos, entre estos el desarrollar un protocolo de investigación, y la recopilación de estadísticas. Ello fue notificado al Comité PARE, refrendándose la recomendación y siendo notificada a la Oficina de la Secretaría Auxiliar de la Gobernación para Asuntos legislativos y Reglamentación. Este proyecto de ley se convirtió el 27 de agosto de 2021 en la Ley 40-2021.⁴

El 24 de agosto de 2021, el señor Gobernador estampó su firma en el P. del S. 358. Esta pieza legislativa enmendó el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, estableciendo que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54-1989 deberá estar presente, sin discreción alguna, un(a) representante del Ministerio Público. La Ley 32-2021 tiene vigencia inmediata después de su aprobación, y es cónsona con la directriz impartida por el señor Gobernador el 3 de mayo de 2021.⁵

El 5 de agosto de 2021, el Hon. Pedro R. Pierluisi, Gobernador de Puerto Rico, también convirtió en ley el P. de la C. 547, titulado como la “Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”. Esta ley tipifica como delito la divulgación y publicación de cualquier

⁴ Véase, Anejo B: Ley 40-2021.

⁵ Véase, Anejo C: Ley 32-2021.

material explícito de carácter íntimo, establece penalidades; y para otros fines, convirtiéndose en la Ley 21-2021.⁶

Otros proyectos de ley firmados por el señor Gobernador—atinentes a asuntos comprendidos en la Orden Ejecutiva 2021-013, los son el P. del S. 11, y el P. del S. 135.

El P. del S. 11 enmendó el Artículo 1 y añadió un inciso (t) al Artículo 2 de la Ley 22-1988, según enmendada, conocida como la “Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”, convirtiéndose el 27 de agosto en la Ley 33-2021. Esta nueva legislación es acorde a los fines de proteger los derechos de las personas sin estatus migratorio definido y el procurar que no se sientan intimidadas o cohibidas al denunciar que han sido víctimas/sobrevivientes de algún delito, que incluye la violencia de género en toda manifestación, o que puedan ser testigos de una violación a la ley.⁷

El P. del S. 135 enmendó el Artículo 11 de la Ley Núm. 17-1988, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”. Este proyecto se convirtió el 16 de agosto en la Ley 37-2021, a los fines de que en los casos donde se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria al Gobierno, incluyendo cada una de sus tres Ramas—Ejecutiva, Legislativa y Judicial, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, estas puedan exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas por los actos de hostigamiento sexual.⁸

D. Revisión de protocolos

El subcomité de Seguridad y Tecnología envió el borrador final vigente del Protocolo Interagencial Para Proveer Orientación a Sobrevivientes de Violencia Doméstica e Intercambio de Información— al subcomité de Política Pública y Legislación, para recopilar las recomendaciones y/u observaciones, a fin de someterlo al pleno del Comité PARE. Se solicitará que el documento (protocolo) en su versión final sea sometido al Comité PARE, en o antes de los próximos 30 días, para que este consejo asesor provea su recomendación en cuanto a su contenido, firma e implementación.

El borrador final del propuesto Protocolo para Notificar a Víctimas de Violencia Sexual el resultado del análisis del Kit de recolección de Evidencia Forense, fue sometido al subcomité de Política Pública y Legislación para comentarios y/u observaciones. Se solicitará que se culmine la revisión en o antes de los próximos 30 días, a fin de ser sometido al Comité PARE, y que este consejo asesor provea su recomendación en cuanto a su contenido, firma e implementación.

⁶ Véase, Anejo D: Ley 21-2021.

⁷ Véase, Anejo E: Ley 33-2021.

⁸ Véase, Anejo F: Ley 37-2021.

Por otra parte, ante la firma del PS 130, se envió el 27 de agosto una notificación al grupo de trabajo que redactó la propuesta del Protocolo para la Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, que consideró—como uno de los marcos de referencia, el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), a fin de revisar y realizar las enmiendas y/o ajustes que procedan en el contenido considerando las definiciones de feminicidios y transfeminicidios, entre otros requerimientos de la ley. Se solicitó se someta el proyecto propuesto de protocolo en o antes del 17 de septiembre, a fin de dar trámite al Comité PARE y expeditar los procesos de evaluación por parte de las agencias concernidas, y las recomendaciones del Comité PARE.

E. Establecer procesos expeditos para el manejo de casos de violencia de género; atención inmediata para asegurar cumplimiento de leyes contra la violencia de género

Según mencionado previamente, el 24 de agosto de 2021, el señor Gobernador firmó en ley el P. del S. 358. Esta ley enmienda el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, requiriendo que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la Ley 54-1989 deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público.

Cónsono con la política pública y la Orden Ejecutiva 2021-013, el Departamento de Justicia anunció el 23 de agosto de 2021 el inicio del proceso requerido para la contratación de personal, entre los que se encuentran 48 nuevos fiscales, para reforzar y ampliar las Unidades Especializadas de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores.⁹ Ello dirigido a la implementación de las medidas y herramientas dirigidas a un manejo expedito, sensible y efectivo de los casos, proveyendo la atención y acción inmediata para asegurar el cumplimiento de leyes contra la violencia de género.¹⁰

⁹ El Departamento de Justicia obtuvo la aprobación de \$3.8 millones por parte del Hon. Pedro R. Pierluisi, Gobernador de Puerto Rico, y de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal para la contratación de 104 empleados(as) transitorios para la creación de 9 unidades especializadas en las Fiscalías de Distrito. A la fecha, se cuentan con 4 Unidades Especializadas en las Fiscalías de los Distritos de San Juan, Bayamón, Carolina y Ponce. De este modo, se contará con personal especializado en violencia doméstica, delitos sexuales y maltrato a menores en las 13 Fiscalías de Distrito.

¹⁰ Las convocatorias para los puestos de abogado(a) transitorio con designación de fiscal especial, administrador(a) de sistema de oficina I transitorio, agente de investigación transitorio, ajustador(a) de reclamaciones de compensación transitorio, auxiliar administrativo(a) transitorio, técnico(a) de reclamaciones de compensación transitorio, auxiliar administrativo(a) transitorio, transcriptor(a) de investigaciones legales transitorio fueron publicadas en la página del Departamento de Justicia; están disponibles en el enlace <http://www.justicia.pr.gov/secretarias-y-oficinas/secretaria-auxiliar-de-recursos-humanos/>.

F. Alianzas Estratégicas

Como parte de las iniciativas del Comité PARE, y del subcomité de Alianzas Estratégicas/Comunitarias y Medios, se han encaminado las conversaciones y propuestas para concretar alianzas con entidades y organizaciones privadas, entre estas los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico conocidos como los “Centros 330”, Liberty Puerto Rico, APS Healthcare, para promover y desarrollar acciones afirmativas y estrategias para la prevención, educación y respuesta a la violencia de género.

G. Fondos CRF y presupuesto de la OE 2021-013

En la semana del 16 al 20 de agosto, la Directora Ejecutiva del Comité PARE recibió por correo electrónico ocho (8) solicitudes de organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios de albergue de emergencia y apoyo a víctimas sobrevivientes de violencia de género. Estas solicitudes fueron remitidas al subcomité de Recursos y Presupuesto para su revisión. El pleno del Comité PARE recibirá las recomendaciones para su análisis, discusión y adjudicación conforme al trámite establecido.¹¹

En cuanto a los fondos asignados al Comité PARE, para el cumplimiento de la Orden Ejecutiva 2021-013 declarando el Estado de Emergencia por el alza de casos de violencia de género, la Oficina de Gerencia y Presupuesto emitió el Memorando Especial Núm. 013-2121, sobre *Procedimiento para la Solicitud, Transferencia y Contabilización de los Fondos asignados mediante la Resolución Conjunta Núm. 144 al Comité PARE para el Cumplimiento del Boletín Administrativo Núm. OE-2021-013*.¹² La Directora Ejecutiva notificó una Resolución el 13 de agosto de 2021, la cual fue reevaluada y revisada en cuanto a peticiones presupuestarias a ser sometidas al trámite de rigor, conforme a las circunstancias del desarrollo de los trabajos, a fin de presentar las recomendaciones para la asignación de recursos presupuestarios para recursos administrativos, ejecución de proyectos, e iniciativas y despliegue de actividades refrendadas y recomendadas por el Comité PARE. Consecuentemente, se emitió y notificó una nueva Resolución el 27 de agosto de 2021, para el trámite establecido.¹³

¹¹ La Oficina de Gerencia y Presupuesto emitió el 8 de julio de 2021 el *Memorando Especial Núm. 014-2020 sobre Enmienda a las Guías y Directrices para la Elegibilidad y Distribución del “Coronavirus Relief Fund”*, el cual notificaron ser aplicable al trámite de este proceso de elegibilidad y distribución de estos fondos. (Véase, Anejo G: Memorando Especial 014-2020).

¹² Véase, Anejo H: Memorando Especial Núm. 013-2021.

¹³ La OGP se integró a los trabajos del Comité PARE para contar con la asesoría técnica para el debido uso de los fondos para atender el estado de emergencia por violencia de género, acorde a la normativa de eficiencia y transparencia.

Sometido por la Presidenta del Comité PARE, Dra. Carmen González Magaz, hoy 30 de agosto de 2021.



Dra. Carmen Ana González Magaz
Presidenta Comité PARE
Secretaria del Departamento de la Familia



Anejos

El proceso del Comité PARE para la evaluación, asignación y distribución de las partidas presupuestarias preliminarmente consideradas por la OGP, estarán sujetas a la distribución y asignación, conforme a la legislación y reglamentación correspondiente para el sano y buen uso de fondos públicos, y en función de los mandatos de la Orden Ejecutiva 2021-013.



GOVERNMENT OF PUERTO RICO
DEPARTMENT OF HOUSING
PUERTO RICO PUBLIC HOUSING ADMINISTRATION

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
PUERTO RICO PUBLIC HOUSING ADMINISTRATION
PUERTO RICO BALANCE OF COMMONWEALTH COC PR 502 AND
WOMEN'S ADVOCATE OFFICE OF PUERTO RICO

ML
L.B.V.
GA
FAAB
CD

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, (hereinafter referred to as the "MOU") is entered into in San Juan, Puerto Rico, this 3 of August of 2021, by and between the **PUERTO RICO PUBLIC HOUSING ADMINISTRATION**, hereinafter referred to as the "PRPHA", a public agency created under Act No. 66 of August 17, 1989, as amended, known as the Public Housing Administration Organic Act ("Organic Act"), herein represented by its Administrator, Alejandro E. Salgado-Colón, Esq., of legal age, married and resident of San Juan, Puerto Rico, as approved by the PRPHA Governing Board Resolution Number 2021-49, dated July 23, 2021, the **PUERTO RICO BALANCE OF COMMONWEALTH COC PR 502**, a recognized group under the United States Urban Housing Development, represented by its designated Collaborative Agency the Family Department, herein represented by Carmen Ana González Magaz, Secretary, of legal age, single and resident of San Juan, Puerto Rico, (hereinafter referred to as the "CoC PR 502"); and Lisdell Flores Barger, President of the CoC PR-502, of legal age, married and resident of Barceloneta; **SOLO POR HOY, INC.**, represented by its authorized representative, Belinda Hill, of legal age, single, and resident of Fajardo, **GUARA BI, INC.**, represented by its authorized representative, Cristian Duarte, of legal age, married, and resident of Georgia; hereinafter referred to as the Partnering Service Agencies; the **WOMEN'S ADVOCATE OFFICE OF PUERTO RICO**, hereinafter referred to as the "WAO", represented in this act by Lersy Boria Vizcarrondo, Esq., of legal age, married and resident of Dorado, Puerto Rico, duly authorized and empowered for the execution of this contract by Act No. 20 of April 11, 2001, as amended, know as "Ley Orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres".

RECITALS

WHEREAS, the PRPHA, agency attached to the Puerto Rico Department of Housing, is engaged in the administration of Puerto Rico's Public Housing program and Housing Choice Voucher (HCV) program and the implementation of public policy to improve the quality of life and living environment of Puerto Rico's low-income families.

WHEREAS, PRPHA With the collaboration of the Puerto Rico Balance of Commonwealth CoC PR 502 (CoC PR 502) commit to administer the Emergency Housing Vouchers ("EHV") program in accordance with all program requirements. PRPHA's objective in administering EHV's is to provide subsidy for rental payments to private property owners for families within the eligibility of at least one of four categories.

WHEREAS, through this program, the PRPHA can help low-income families obtain quality housing in Puerto Rico and optimize self-sufficiency among individuals and families on risk or experiencing homelessness. The PRPHA will work with community partners to determine the best use for the EHV's along with other resources available to the community. It is the PRPHAs goal to work together with CoCs to use EHV's for the purpose of addressing racial and other inequities within the

ANEJO A

community and the unmet needs of a vulnerable population by providing permanent housing opportunity.

WHEREAS, PRPHA administers a variety of tenant-based, project based, and grant programs under Section 8 of 1937 Housing Act with much success. Through PRPHA's program administration, we are able to ensure eligibility and calculate family share of rent for participating families, ensure housing quality standards are enforced, ensure reasonable rents are paid for all units under contract in EHV program; and make every effort to assist a substantial percentage of its EHV families to find units in low-poverty neighborhoods.

WHEREAS, it is the goal of the PRPHA that all the EHV participants will have access to the supportive services they require. Thus, the PRPHA and CoCs will ensure certain services are provided to EHV participants, which include but are not limited to, supporting family stability such as counseling, job training programs, employment assistance, and financial literacy courses. It is the PRPHA's hope to seek and maintain the engagement of the participants by providing these supportive services in order to contribute to the participating family's stability and improve their lives.

WHEREAS, the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) has provided PRPHA with additional HCV program funds for the administration of the Emergency Housing Voucher (EHV) program in accordance with the EHV Operating Requirement Notice (PIH Notice 2021-15) and applicable HCV program regulations.

WHEREAS, the WAO is committed to ensure the full development of women, promote equality and equity, eradicate all manifestations of discrimination, violence. Furthermore, the WAO promotes and enforce public policies that guarantee women's human rights and educate the community to make proactive and affirmative decisions in defense of women's rights.

WHEREAS, This MOU outlines the partnership between the CoC PR 502 and the PRPHA. It states the services that will be offered to participants and delineate the responsibilities and roles of the CoC and the PRPHA. Furthermore, it will detail the populations that will be prioritized for receiving EHV's and the way by which referrals will be processed.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and the terms and conditions set forth herein, the PRPHA and the CoC PR 502 agree to execute this MOU subject to the following:

TERMS AND CONDITIONS

I. POPULATIONS ELIGIBLE FOR EHV ASSISTANCE TO BE REFERRED BY COC

Eligibility of the EHV's is limited to individuals and families who are (1) homeless; (2) at risk of homelessness; (3) fleeing or attempting to flee domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking or human trafficking; or (4) recently homeless and for whom providing rental assistance will prevent the family's homeless or having high risk of housing instability. [Refer to Appendix A for term's definitions].

Handwritten notes in blue ink on the left margin: "M", "F.B.V.", "G", "K.B.", and "CD".

II. TERM OF AGREEMENT

Commencement and Duration: This Agreement shall be in effect and enforceable between the parties hereto from the date of its execution until June 30, 2022.

III. SERVICES TO BE PROVIDED TO ELIGIBLE FAMILIES

The following list of services will be provided by partnering providers to assist individuals and families have success in the EHV program by providing them the following:

1. Partnering service providers will support individuals and families in completing applications and obtaining necessary supporting documentation to support referrals and applications for assistance, while aiding households in addressing barriers.
2. Partnering service providers will support PRPHAs in ensuring appointment notifications to eligible individuals and families. Also, will assist eligible households in getting to meetings with the PRPHA.
3. Partnering service providers will establish windows of time for EHV applicants to complete intake interviews for EHV.
4. Partnering service providers will provide housing search assistance for eligible individuals and families.
5. Partnering service providers will provide counseling on compliance with rental lease requirements.
6. Partnering service providers will assess individuals and families who may require referrals for assistance on security deposits, utility hook-up fees, and utility deposits.
7. Partnering service providers will assess and refer individuals and families to benefits and supportive services, where applicable.

M
L-BV
Q
AB

CD

IV. PRPHA Roles and Responsibilities

PRPHA is responsible for all the administrative tasks for the EHV program in accordance with the EHV Operating Requirement Notice (PIH Notice 2021-15) and applicable HCV program regulations. These roles and responsibilities include but are not limited to the following:

1. Coordinate and consult with the CoC in developing the services and assistance to be offered under the EHV services fees.
2. Accept direct referrals for eligible individuals and families through the CoC Coordinated Entry System or from Victim Service Provider ("VSP").
3. Receive direct referral from outside the CoC if (a) the Coordinated Entry System does not have sufficient number of eligible families to refer to the PRPHA for the EHV program; or (b) the Coordinated Entry System does not identify families that may be eligible for EHV assistance because they are fleeing or attempting to flee domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking, or human trafficking.
4. Inform households on the waiting list of the availability of EHV by either posting the information to the website or providing public notice in the respective communities.
5. Use EHV if necessary, to facilitate an emergency transfer in accordance with the Violence Against Women Act ("VAWA") as outlined in the PRPHA's emergency transfer plan.
6. Work with CoC to manage preferences for EHV admissions.

7. Commit a sufficient number of staff and necessary resources to ensure that the application, certification, and voucher issuance processes are completed in a timely manner.
8. Commit a sufficient number of staff and resources to ensure that the inspections of units are completed in a timely manner.
9. Review applications for EHV, certifying program eligibility, and conducting annual recertifications for continue eligibility.
10. Ensure that housing provided to participating families is decent, safe, and sanitary housing by determining if units meet Housing Quality Standards. The PRPHA may approve these units for leasing contracts or contract with other qualified entities to perform the HQS inspection, which may include the CoC.
11. Designate personnel to serve as the lead EHV liaison.
12. Ensure housing search assistance is made available to EHV families during their initial housing search.
13. Accept self-certifications as the highest form of verification of admission when involving identity or income verification.
14. Explain and provide information about policies and procedures to current and prospective landlords and participants.
15. Conduct monitory assessment for performance and compliance of EHV participants and owners.
16. Help create customized plans to address or mitigate barriers that individual families may face in renting a unit with an EHV.
17. Provide owner recruitment and outreach.
18. Collaborate with CoC on strategies by establishing payment standards that increase pool of available high-quality housing units.
19. Provide landlord incentives to persuade them to lower barriers of race, gender, and disability.
20. Provide outreach to engage and collaborate with partner agencies and CoC's to help target the needs of people facing high Covid transmission and health risks due to congregate shelters, time limited non congregate shelters, and in unsheltered situations.
21. Maintain a separate waiting list for EHV referrals.
22. Work with partners to select from a menu of waivers to aide eligible households to eliminate barriers to housing and ensure expedited leasing.
23. Grant any and all reasonable accommodation requested to extend search term for individuals with disabilities.
24. Maximize lease-up of the EHV program within 12 months from award.
25. Guarantee that EHV referrals are expedited and result in a successful - lease-up within 60-90 days of voucher issuance. As such, the referrals received will be scheduled for an eligibility appointment within three business days of receipt of the referral. All of the eligible EHV participants who complete all required tasks (attending appointments/providing required documents) will be issued a voucher within the same week in which eligibility for participation is determined by the PRPHA. Requests for tenancy approvals received by the PRPHA will be scheduled for inspection within three (3) business days of the receipt of all completed documentation.
26. Comply with the provisions of this MOU.

MW
L-BV
G
AB
CD

V. COC ROLES AND RESPONSIBILITIES

The CoC roles and responsibilities include but are not limited to the following:

1. Designate and maintain a lead EHV liaison to communicate with the PRPHA.
2. Refer eligible individuals and families to the PRPHA using the community's coordinated entry system and provide documentation that the family qualifies under at least one of four one of the four eligible categories for EHV assistance.
3. Ensure equitable access to coordinated entry system and assess eligibility and prioritized households.
4. Use the coordinated entry system to help coordinate and manage crisis response system's resources in order to allow users to make consistent decisions based on available information to connect people to housing and service interventions efficiently and effectively.
5. Promote communitywide commitment to the goal of ending homelessness.
6. Support eligible individuals and households in completing and applying for supportive documentation to accompany admissions application to the PRPHA (i.e., Self-certifications, birth certificate, socials security card, etc.)
7. Attend EHV participant briefings when needed and aid family through the admissions process.
8. Assess all households referred for EHV for mainstream benefits and supportive services available to support eligible individuals and families through their transition.
9. Identify and provide supportive services to EHV families. (While EHV participants are not required to participate in services, the CoC should assure that services are available and accessible).
10. Provide funded services which may include street outreach, emergency shelter, transitional housing, rapid rehousing, and permanent supportive housing.
11. Provide written policies and procedures that include a process by which individuals and families may appeal coordinated entry decisions.
12. Comply with the provisions of this MOU.

VI. WAO ROLES AND RESPONSIBILITIES

The WAO roles and responsibilities include but are not limited to the following:

1. Designate and maintain a lead EHV liaison to communicate with the PRPHA.
2. Refer eligible individual and families to the PRPHA using the community's coordinated entry system and provide documentation that the family qualifies under at least one of four eligible categories one of the four eligible categories for EHV assistance.
3. Ensure equitable access to coordinated entry system, assess eligibility and prioritized households.
4. Use the coordinated entry system to help coordinate and manage crisis response system's resources in order to allow users to make consistent decisions based on available information to connect people to housing and service interventions efficiently and effectively.
5. Support eligible individuals and households in completing and applying for supportive documentation to accompany admissions application to the PRPHA (i.e., Self-certifications, birth certificate, socials security card, etc.)
6. Comply with the provisions of this MOU.

VII. THIRD PARTY ENTITY ROLES RESPONSIBILITIES

PRPHA and CoC encourage partnerships with Third Party Entities such as health and behavioral agencies like community health centers, state and country

behavioral agencies, state Medicaid agencies and managed care to explore funding opportunities and provide housing search/navigation. They hope to provide an ongoing tenancy and wrap-around supportive services for those who may benefit from such services to maintain housing stability.

VIII. REIMBURSEMENT OF THE PARTNERING SERVICES BY THE PRPHA

The PRPHA may use eligible funds to reimburse the Partnering Service Agencies (**Solo por Hoy, Inc. and Guara Bi, Inc.**) for eligible and reasonable expenses. Each EHV is granted only up to \$3,500.00 in funds to cover the reimbursement costs of service fees. **(Refer to Appendix B for EHV costs for reimbursement).**

The PRPHA will pay the partnering service agencies, for Services performed during the Term of this MOU, a maximum amount not to exceed \$360,500.00, Account Number 4190-04-000 from the CONTRACT SERVICES Funds. Such payment shall be compensation for all services required, performed and accepted under this MOU. The PRPHA has 90 business days to reimburse all eligible and reasonable activities. In order to receive reimbursement, the CoC must provide documentation of the cost of services. Such services for reimbursement include but are not limited to the following:

M

L.B.V.
G
R.B.
CA

1. Provide housing search assistance.
2. Cover part or all of the holding fee for units where a fee is required by the owner after a tenant's application has been accepted but before lease is signed; The CoCs must provide any back up documentation to support this cost for reimbursement.
3. Provide a security deposit assistance and utility deposit assistance for the family to cover necessary expenses; The CoCs must provide any back up documentation to support this cost for reimbursement.
4. Provide assistance for some or all of the family's reasonable moving expenses as well as the first month's rent and any security deposit.
5. Assist the family with some or all of the cost of renter's insurance but only where the purchase of insurance is a condition of the lease.
6. Aid the family with some or all of the costs of acquiring essential household items as defined by the PRPHA; The CoCs must provide any back up documentation to support the cost for reimbursement purposes.
7. Cover any and all Housing Assistance Payments to landlords on behalf of participants. The CoCs must provide any back up documentation to support payments reimbursement.
8. Provide owner recruitment and outreach as well as incentive and retention payments; In order for the PRPHA to reimburse these, the CoC must send a separate proposal for explaining the services and costs prior to engagement of the recruitment program.
9. Cover any and all other eligible uses including tenant readiness services. These tenant readiness services include educating renters on how to acquire and keep descent housing. These services also include counseling, job training programs, employment assistance, and financial literacy courses.

The CoC program will assist to provide funding for tasks executed by nonprofit providers and state and local governments to quickly rehouse homeless individuals, families and minimize the trauma and dislocation that homelessness causes on individuals, families, and communities. The CoC funds may be used to cover many of the costs associated with the EHV program such as:

1. Covering coordinated entry costs with coordinated entry grants.

2. Assist with housing location by using rapid rehousing funds.
3. Use Homeless Emergency Solutions Grants (ESG)-CV funds for referrals, housing location, and other costs which may include outreach, essential services in emergency shelters, RRH, and homeless prevention.

IX. PROGRAM EVALUATION

The PRPHA, and CoC or designated CoC recipient agree to cooperate with HUD, provide requested data to HUD or HUD approved contractor delegated to discharge the responsibility of program evaluation protocols established by HUD or HUD contractor, including possible random assignment procedures.

X. NOTICES

- A. All notices required or permitted to be given under the Agreement shall be in writing, and shall be deemed given when delivered by hand or sent by registered or certified mail, return receipt requested, to the address as follows:

MT
L.D.V.
AB
CA

To: PRPHA
Alejandro E. Salgado-Colón, Esq.
Administrator
Puerto Rico Public Housing Administration
PO Box 363188
San Juan, Puerto Rico 00936-3188

To: COC PR 502
Liz Mónica Lamboy-López Executive
Director, on behalf of Carmen González
Magaz PhD., Secretary of the Family
Department
Office 2602
Mercantil Plaza Building
Ponce de León Avenue
Hato Rey, Puerto Rico

To: WAO
Lersy Boria Vizcarrondo, Esq.
Apartado 11382
Estación Fernandez Juncos
San Juan, PR 00910-1382

To: Solo por Hoy, Inc.
Belinda Hill
Executive Director
#68 Calle Georgetti
San Juan, PR 00926

To: Guara Bi. Inc.
Cristian Duarte
COO
PO Box 6581
Caguas, PR 00726

- B. Either party may change its address by written notice to the other party. All other communications may be had in person with the PRPHA with an authorized representative of the Implementor.

XI. ENTIRE AGREEMENT

This MOU and all its Exhibits represents the entire and integrated agreement between PRPHA and the COC PR 502 and supersede all prior negotiations, representations, agreements and/or understandings of any kind. This MOU may be amended only by written document signed by both PRPHA and the COC PR 502.

XII. MODIFICATION OF MOU

Any modification of this MOU or additional obligation assumed by either party in connection with this Agreement shall be binding only if written and signed by both parties, and its authorized representatives.

XIII. BINDING EFFECT

PR
This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the PRPHA and the COC PR 502, their successors and assigns.

XIV. ASSIGNMENT OF RIGHTS

L.B.V.
The rights of each party hereunder are personal to that party and may not be assigned or otherwise transferred to any other person, firm, corporation, or other entity without the prior, express, and written consent of the other parties.

XV. NON-WAIVER

CA
AB
CA
The failure or delay of either party to insist upon the performance of and/or the compliance with any of the terms and conditions of this MOU shall not be construed as a waiver of any such terms and conditions or the right to enforce compliance with such terms and conditions.

XVI. HEADINGS

The titles to the paragraphs of this MOU are solely for reference purposes and the convenience of the parties and shall not be used to explain, modify, simplify, or aid in the interpretation of the provisions of this Agreement.

XVII. SEVERABILITY

If any provision of this Agreement shall operate or would prospectively operate to invalidate the Agreement in whole or in part, then such provision only shall be deemed severed and the remainder of the Agreement shall remain operative and in full effect.

XVIII. OFFICE OF THE COMPTROLLER

Both Parties are compelled to comply with the regulations imposed by the Office of the Comptroller of Puerto Rico as to all contracts executed by and/or with public entities, by presenting this MOU for revision by the Comptroller, within fifteen (15) days from the date of its execution.

[SIGNATURES ON THE NEXT PAGE]

IN WITNESS THEREOF, the parties hereto execute this MOU in the place and on the date first above written.

PRPHA

**PUERTO RICO FAMILY DEPARTMENT
COC PR 502**


Alejandro E. Salgado-Colón, Esq.
Tax Id No: 660-46-6229


Carmen Ana González Magaz, PhD
Tax Id No: 660-70-7858

**WOMEN'S ADVOCATE OFFICE OF
PUERTO RICO**


Lersy Boria Vizcarrondo, Esq.
Tax Id No: 660-63-7549


Lisdel Flores Barger
President CoC PR-502

SOLO POR HOY, INC.

GUARA BI, INC.


Belinda Hill
Tax Id No: 660-72-3251


Cristian Duarte
Tax Id No: 660-70-5571

Appendix A- Definition of Terms:

Individuals and families who are homeless

Homeless means:

(1) An individual or family who lacks a fixed, regular, and adequate nighttime residence, meaning:

(i) An individual or family with a primary nighttime residence that is a public or private place not designed for or ordinarily used as a regular sleeping accommodation for human beings, including a car, park, abandoned building, bus or train station, airport, or camping ground.

(ii) An individual or family living in a supervised publicly or privately operated shelter designated to provide temporary living arrangements (including congregate shelters, transitional housing, hotels and motels paid for by charitable organizations or by federal, State, or local government programs for low-income individuals); or

(iii) An individual who is exiting an institution where he or she resided for 90 days or less and who resided in an emergency shelter or place not meant for human habitation immediately before entering that institution.

(2) An individual or family who will imminently lose their primary nighttime residence, provided that:

(i) The primary nighttime residence will be lost within 14 days of the date of application for homeless assistance.

(ii) No subsequent residence has been identified; and

(iii) The individual or family lacks the resources or support networks, e.g., family, friends, faith-based or other social networks, needed to obtain other permanent housing.

(3) Unaccompanied youth under 25 years of age, or families with children and youth, who do not otherwise qualify as homeless under this definition, but who:

(i) Are defined as homeless under section 387 of the Runaway and Homeless Youth Act (42 U.S.C. 5732a), section 637 of the Head Start Act (42 U.S.C. 9832), section 41403 of the Violence Against Women Act of 1994 (42 U.S.C. 14043e-2), section 330(h) of the Public Health Service Act (42 U.S.C. 254b(h)), section 3 of the Food and Nutrition Act of 2008 (7 U.S.C. 2012), section 17(b) of the Child Nutrition Act of 1966 (42 U.S.C. 1786(b)), or section 725 of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11434a);

(ii) Have not had a lease, ownership interest, or occupancy agreement in permanent housing at any time during the 60 days immediately preceding the date of application for homeless assistance;

(iii) Have experienced persistent instability as measured by two moves or more during the 60-day period immediately preceding the date of applying for homeless assistance; and

(iv) Can be expected to continue in such status for an extended period of time because of chronic disabilities; chronic physical health or mental health conditions; substance addiction; histories of domestic violence or childhood abuse (including neglect); the presence of a child or youth with a disability; or

h
B-V
G
A
CD

two or more barriers to employment, which include the lack of a high school degree or General Education Development (GED), illiteracy, low English proficiency, a history of incarceration or detention for criminal activity, and a history of unstable employment.

The meaning of "at-risk of homelessness" is as such term is defined in section 401(1) of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11360(1)), which is codified in HUD's Continuum of Care Program regulations at 24 CFR 578.3 and reads as follows:

B. Individuals or families who are at-risk of homelessness

At risk of homelessness.

(1) An individual or family who:

(i) Has an annual income below 30 percent of median family income for the area, as determined by HUD;

(ii) Does not have sufficient resources or support networks, e.g., family, friends, faith-based or other social networks, immediately available to prevent them from moving to an emergency shelter or another place described in paragraph (1) of the "Homeless" definition above; and

(iii) Meets one of the following conditions:

(A) Has moved because of economic reasons two or more times during the 60 days immediately preceding the application for homelessness prevention assistance;

(B) Is living in the home of another because of economic hardship;

(C) Has been notified in writing that their right to occupy their current housing or living situation will be terminated within 21 days of the date of application for assistance;

(D) Lives in a hotel or motel and the cost of the hotel or motel stay is not paid by charitable organizations or by federal, State, or local government programs for low-income individuals;

(E) Lives in a single-room occupancy or efficiency apartment unit in which there reside more than two persons, or lives in a larger housing unit in which there reside more than 1.5 people per room, as defined by the U.S. Census Bureau;

(F) Is exiting a publicly funded institution, or system of care (such as a health-care facility, a mental health facility, foster care or other youth facility, or correction program or institution); or

(G) Otherwise lives in housing that has characteristics associated with instability and an increased risk of homelessness, as identified in the recipient's approved consolidated plan.

(2) A child or youth who does not qualify as "homeless" under this section, but qualifies as "homeless" under section 387(3) of the Runaway and Homeless Youth Act (42 U.S.C. 5732a(3)), section 637(11) of the Head Start Act (42 U.S.C. 9832(11)), section 41403(6) of the Violence Against Women Act of 1994 (42 U.S.C. 14043e-2(6)), section 330(h)(5)(A) of the Public Health Service Act (42 U.S.C. 254b(h)(5)(A)), section 3(m) of the Food and Nutrition Act of 2008 (7 U.S.C.

mm
L.B.V.
CS
AD
CD

2012(m)), or section 17(b)(15) of the Child Nutrition Act of 1966 (42 U.S.C. 1786(b)(15)); or

(3) A child or youth who does not qualify as "homeless" under this section, but qualifies as "homeless" under section 725(2) of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11434a(2)), and the parent(s) or guardian(s) of that child or youth if living with her or him.

C. Individuals or families who are fleeing, or attempting to flee, domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking or human trafficking

This category is composed of any individual or family who is fleeing, or is attempting to flee, domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking, or human trafficking. This includes cases where a HUD-assisted tenant reasonably believes that there is a threat of imminent harm from further violence if they remain within the same dwelling unit, or in the case of sexual assault, the HUD-assisted tenant reasonably believes there is a threat of imminent harm from further violence if they remain within the same dwelling unit that they are currently occupying, or the sexual assault occurred on the premise during the 90- day period preceding the date of the request for transfer.

Domestic violence includes felony or misdemeanor crimes of violence committed by:

- W
L-BV
G
AB
CA
1. a current or former spouse or intimate partner of the victim (the term "spouse or intimate partner of the victim" includes a person who is or has been in a social relationship of a romantic or intimate nature with the victim, as determined by the length of the relationship, the type of the relationship, and the frequency of interaction between the persons involved in the relationship),
 2. a person with whom the victim shares a child in common,
 3. a person who is cohabitating with or has cohabitated with the victim as a spouse or intimate partner,
 4. a person similarly situated to a spouse of the victim under the domestic or family violence laws of the jurisdiction receiving grant monies, or
 5. any other person against an adult or youth victim who is protected from that person's acts under the domestic or family violence laws of the jurisdiction.

Dating violence means violence committed by a person:

1. Who is or has been in a social relationship of a romantic or intimate nature with the victim; and
2. Where the existence of such a relationship shall be determined based on a consideration of the following factors:
 1. The length of the relationship;
 2. The type of relationship; and
 3. The frequency of interaction between the persons involved in the relationship.

Sexual assault means any nonconsensual sexual act proscribed by Federal, Tribal, or State law, including when the victim lacks capacity to consent.

Stalking means engaging in a course of conduct directed at a specific person that would cause a reasonable person to:

(1) Fear for the person's individual safety or the safety of others; or (2) Suffer substantial emotional distress.

Human trafficking includes both sex and labor trafficking, as outlined in the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), as amended (22 U.S.C. § 7102). These are defined as:

Sex trafficking means the recruitment, harboring, transportation, provision, obtaining, patronizing, or soliciting of a person for the purpose of a commercial sex act, in which the commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in which the person induced to perform such act has not attained 18 years of age; (and)

Labor trafficking means the recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for labor or services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery.

D. Individuals or families who are recently homeless

This category is composed of individuals and families determined by the CoC or its designee to meet the following definition.

Recently homeless is defined as individuals and families who have previously been classified by a member agency of the CoC as homeless but are not currently homeless as a result of homeless assistance (financial assistance or services), temporary rental assistance or some type of other assistance, and where the CoC or its designee determines that the loss of such assistance would result in a return to homelessness or the family having a high risk of housing instability. Examples of households that may be defined as recently homeless by the CoC include, but are not limited to, participants in rapid rehousing, and permanent supportive housing.

Individuals and families classified as recently homeless must be referred by the CoC or its designee.

W
F.B.V.
G
H
A

APPENDIX B
SERVICE FEES FOR REIMBURSEMENT

The EHV program provides funding for service fees and other eligible expenses to prepare for and respond to coronavirus to facilitate the leasing of the emergency housing vouchers, such as security deposit assistance and other costs related to retention and support of participating owners. The PRPHA will reimburse the eligible service fees that CoC's provide to EHV participants. These fees may only be used for EHV administration and eligible expenses. Furthermore, the CoC must provide receipts and/or documentation of the services provided in order to receive reimbursement.

MZ
The amount assigned to the PRPHA will be equal to \$3,500 for each EHV allocated to the PRPHA. The service fee amount is not tied to each voucher, but instead is the combined total of the services fees that are available to create services that will best address the leasing challenges faced by the EHV eligible families in the PRPHA's community.

L.F.V.
CJ
AB
The service fee eligible uses are designed to prevent and respond to coronavirus by facilitating the leasing of the EHV's, which will provide vulnerable individuals and families a much safer housing environment to minimize the risk of coronavirus exposure or spread. Specifically, individuals and families who are homeless or at-risk of homelessness are often living in conditions that significantly increase the risk of exposure to coronavirus in addition to other health risks.

CD
The services fees fall into four main components comprised of specific activities:

A. Housing Search Assistance.

The CoC's may receive reimbursement for service fees used to provide the required housing search assistance to EHV families during their initial housing search. Housing search assistance is a broad term which may include many activities such as but not limited to helping a family identify and visit potentially available units during their housing search, helping to find a unit that meets the household's disability-related needs, providing transportation and directions, assisting with the completion of rental applications and PRPHA forms, and helping to expedite the EHV leasing process for the family.

Housing Search Assistance may include but is not limited to providing staff to ID property locations or get the property documentation. Covering the costs for these CoCs to visit the properties.

The reasonable costs for these expenses is \$10.95 per hour, based on the Executive Order 13658: Federal Minimum Wage for Contractors. For claim this reimbursement the CoCs have to provide a Time Sheet that reflects the services hours to the participant family.

It may also include average cost for moving and packing materials for the participants. These moving expenses include move-in fees and deposits. The CoC may provide assistance for some or all of the family's reasonable moving

expenses when they initially lease a unit with the EHV. The CoC may not provide moving expenses assistance for subsequent moves unless the family is required to move for reasons other than something the family did or failed to do (e.g., the CoC is terminating the HAP contract because the owner did not fulfill the owner responsibilities under the HAP contract or the owner is refusing to offer the family the opportunity to enter a new lease after the initial lease term, as opposed to the family choosing to terminate the tenancy in order to move to another unit), or a family has to move due to domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking, for example.

The reasonable average moving costs within the metropolitan area is based off the number of rooms in the unit. The number of units will determine the number of boxes a contractor would have to move for the tenant. These may include the following:

Moving Expense (1 Bedroom)	\$600.00
Moving Expense (2 Bedroom)	\$650.00
Moving Expense (3 Bedroom)	\$700.00
Moving Expense (4 Bedroom)	\$750.00

If the family themselves don't have a method of transportation, they will be given \$50.00 to \$75.00 to cover their transportation fees.

B. Security Deposit/Utility Deposit/Rental Application/Holding Fee Uses

The CoC's may receive reimbursement for service fees that have been used to provide the following:

- 1) Application fees/non-refundable administrative or processing fees/refundable application deposit assistance.
- 2) Holding fees. It is in the discretion of the CoC to cover part or all of the holding fee for units where the fee is required by the owner after a tenant's application has been accepted but before the lease signing. The CoC and owner must agree how the holding fee gets rolled into the deposit, and under what conditions the fee will be returned. In general, owners need to accept responsibility for making needed repairs to a unit required by the initial housing quality standards (HQS) inspections and can only keep the holding fee if the client is at fault for not entering into a lease.
- 3) Security deposit assistance. The CoC may provide security deposit assistance for the family. The amount of the security deposit assistance may not exceed the lesser of two months' rent to owner, the maximum-security deposit allowed under applicable state and/or local law, or the actual security deposit required by the owner. The CoC may choose to pay the security deposit assistance directly to the owner or may pay the assistance to the family, provided the CoC verifies the family paid the security deposit. The CoC may place conditions on the security deposit assistance, such as requiring the

owner or family to return the security deposit assistance to the CoC at the end of the family's tenancy (less any amounts retained by the owner in accordance with the lease). Security deposit assistance returned to the CoC must be used for either services fee eligible uses or other EHV administrative costs.

- 4) Utility deposit assistance/utility arrears. The CoC may provide utility deposit assistance for some or all of the family's utility deposit expenses. The deposit for LUMA in Puerto Rico is \$50.00 for public housing residents. Assistance can be provided for deposits (including connection fees) required for the utilities to be supplied by the tenant under the lease. The CoC may choose to pay the utility deposit assistance directly to the utility company or may pay the assistance to the family, provided the PRPHA verifies the family paid the utility deposit. The CoC may place conditions on the utility deposit assistance, such as requiring the utility supplier or family to return the utility deposit assistance to the CoC at such time the deposit is returned by the utility supplier (less any amounts retained by the utility supplier). In addition, some families may have large balances with gas, electric, water, sewer, or trash companies that will make it difficult if not impossible to establish services for tenant-supplied utilities. The CoC may also provide the family with assistance to help address these utility arrears to facilitate leasing. Utility deposit assistance that is returned to the CoC must be used for either services fee eligible uses or other EHV administrative costs.

M
F.B.V.
CA

The CoC will assist the participant in setting up an appointment at the regional LUMA office to begin the application process in order to receive electricity at their unit. The CoC will help in ascertaining and providing the necessary documentation throughout the application process including landlord/tenant contract and applicant's social security number.

The reasonable average costs for these expenses may include the following:

One month rent	\$439.00
(Based off of 1-bedroom FMR in San Juan; higher amounts authorized based on rent reasonableness determination for bedroom size)	
Security deposit (generally equal to one month's rent)	\$439.00
Utilities – Water Deposit	\$75.00
Utilities - Electric Deposit	\$150.00

C. Owner-related uses

The CoC's may receive reimbursement for service fees that have been used to provide the following owner-related uses:

- 1) Owner recruitment and outreach. The CoC may use the service fee funding to conduct owner recruitment and outreach specifically for

EHVs. In addition to traditional owner recruitment and outreach, activities may include conducting pre-inspections or otherwise expediting the inspection process, providing enhanced customer service, and offering owner incentive and/or retention payments. In order to be reimbursed the CoC must provide a proposal specifying the type of recruitment and outreach as well as the costs. The proposal needs to be approved prior to a request for reimbursement.

D. Other Eligible Expenses

- 1) Tenant-readiness services. The CoC may use the services fee funding to help create customized plans to address or mitigate barriers that individual families may face in renting a unit with an EHV, such as negative credit, lack of credit, negative rental or utility history, or to connect the family to other community resources (including COVID-related resources) that can assist with rental arrears.
- 2) Essential household items. The CoC may use the services fee funding to assist the family with some or all of the costs of acquiring essential household items as defined by the PRPHA (e.g., tableware, bedding, etc, cooking appliances, etc.).
- 3) Renter's insurance if required by the lease. The CoC may use the services fee funding to assist the family with some or all of the cost of renter's insurance, but only in cases where the purchase of renter's insurance is a condition of the lease.

M
LB-V
G
AB
CA

The reasonable average costs for these expenses may include the following:

Mattress	\$300.00
Mattress frame	\$100.00
Bedding Sets	\$30.00
Silverware/Cooking Appliances	\$30.00
Dining Table	\$80.00
Chairs	\$40.00
Microwave	\$50.00
Refrigerator	\$300.00



GOVERNMENT OF PUERTO RICO
DEPARTMENT OF HOUSING
PUERTO RICO PUBLIC HOUSING ADMINISTRATION

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
PUERTO RICO PUBLIC HOUSING ADMINISTRATION
PUERTO RICO BALANCE OF COMMONWEALTH COC PR 502 AND
WOMEN'S ADVOCATE OFFICE OF PUERTO RICO

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, (hereinafter referred to as the "MOU") is entered into in San Juan, Puerto Rico, this 3 of August of 2021, by and between the **PUERTO RICO PUBLIC HOUSING ADMINISTRATION**, hereinafter referred to as the "PRPHA", a public agency created under Act No. 66 of August 17, 1989, as amended, known as the Public Housing Administration Organic Act ("Organic Act"), herein represented by its Administrator, Alejandro E. Salgado-Colón, Esq., of legal age, married and resident of San Juan, Puerto Rico, as approved by the PRPHA Governing Board Resolution Number 2021-49, dated July 23, 2021, the **PUERTO RICO BALANCE OF COMMONWEALTH COC PR 502**, a recognized group under the United States Urban Housing Development, represented by its designated Collaborative Agency the Family Department, herein represented by Carmen Ana González Magaz, Secretary, of legal age, single and resident of San Juan, Puerto Rico, (hereinafter referred to as the "CoC PR 502"); and Lisdel Flores Barger, President of the CoC PR-502, of legal age, married and resident of Barceloneta; **SOLO POR HOY, INC.**, represented by its authorized representative, Belinda Hill, of legal age, single, and resident of Fajardo, **GUARA BI, INC.**, represented by its authorized representative, Cristian Duarte, of legal age, married, and resident of Georgia; hereinafter referred to as the Partnering Service Agencies; the **WOMEN'S ADVOCATE OFFICE OF PUERTO RICO**, hereinafter referred to as the "WAO", represented in this act by Lersy Boria Vizcarrondo, Esq., of legal age, married and resident of Dorado, Puerto Rico, duly authorized and empowered for the execution of this contract by Act No. 20 of April 11, 2001, as amended, know as "Ley Orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres".

Handwritten initials and marks on the left margin: a large signature, "L.B.V.", a circled mark, "fob", and "CD".

RECITALS

WHEREAS, the PRPHA, agency attached to the Puerto Rico Department of Housing, is engaged in the administration of Puerto Rico's Public Housing program and Housing Choice Voucher (HCV) program and the implementation of public policy to improve the quality of life and living environment of Puerto Rico's low-income families.

WHEREAS, PRPHA With the collaboration of the Puerto Rico Balance of Commonwealth CoC PR 502 (CoC PR 502) commit to administer the Emergency Housing Vouchers ("EHV") program in accordance with all program requirements. PRPHA's objective in administering EHV's is to provide subsidy for rental payments to private property owners for families within the eligibility of at least one of four categories.

WHEREAS, through this program, the PRPHA can help low-income families obtain quality housing in Puerto Rico and optimize self-sufficiency among individuals and families on risk or experiencing homelessness. The PRPHA will work with community partners to determine the best use for the EHV's along with other resources available to the community. It is the PRPHAs goal to work together with CoCs to use EHV's for the purpose of addressing racial and other inequities within the

community and the unmet needs of a vulnerable population by providing permanent housing opportunity.

WHEREAS, PRPHA administers a variety of tenant-based, project based, and grant programs under Section 8 of 1937 Housing Act with much success. Through PRPHA's program administration, we are able to ensure eligibility and calculate family share of rent for participating families, ensure housing quality standards are enforced, ensure reasonable rents are paid for all units under contract in EHV program; and make every effort to assist a substantial percentage of its EHV families to find units in low-poverty neighborhoods.

WHEREAS, it is the goal of the PRPHA that all the EHV participants will have access to the supportive services they require. Thus, the PRPHA and CoCs will ensure certain services are provided to EHV participants, which include but are not limited to, supporting family stability such as counseling, job training programs, employment assistance, and financial literacy courses. It is the PRPHA's hope to seek and maintain the engagement of the participants by providing these supportive services in order to contribute to the participating family's stability and improve their lives.

WHEREAS, the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) has provided PRPHA with additional HCV program funds for the administration of the Emergency Housing Voucher (EHV) program in accordance with the EHV Operating Requirement Notice (PIH Notice 2021-15) and applicable HCV program regulations.

WHEREAS, the WAO is committed to ensure the full development of women, promote equality and equity, eradicate all manifestations of discrimination, violence. Furthermore, the WAO promotes and enforce public policies that guarantee women's human rights and educate the community to make proactive and affirmative decisions in defense of women's rights.

WHEREAS, This MOU outlines the partnership between the CoC PR 502 and the PRPHA. It states the services that will be offered to participants and delineate the responsibilities and roles of the CoC and the PRPHA. Furthermore, it will detail the populations that will be prioritized for receiving EHV's and the way by which referrals will be processed.

NOW THEREFORE, in consideration of the mutual promises and the terms and conditions set forth herein, the PRPHA and the CoC PR 502 agree to execute this MOU subject to the following:

TERMS AND CONDITIONS

I. POPULATIONS ELIGIBLE FOR EHV ASSISTANCE TO BE REFERRED BY COC

Eligibility of the EHV's is limited to individuals and families who are (1) homeless; (2) at risk of homelessness; (3) fleeing or attempting to flee domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking or human trafficking; or (4) recently homeless and for whom providing rental assistance will prevent the family's homeless or having high risk of housing instability. [Refer to Appendix A for term's definitions].

Handwritten notes in blue ink on the left margin: a signature, "F.B.V.", a signature, "WAO", and "CD".

II. TERM OF AGREEMENT

Commencement and Duration: This Agreement shall be in effect and enforceable between the parties hereto from the date of its execution until June 30, 2022.

III. SERVICES TO BE PROVIDED TO ELIGIBLE FAMILIES

The following list of services will be provided by partnering providers to assist individuals and families have success in the EHV program by providing them the following:

1. Partnering service providers will support individuals and families in completing applications and obtaining necessary supporting documentation to support referrals and applications for assistance, while aiding households in addressing barriers.
2. Partnering service providers will support PRPHAs in ensuring appointment notifications to eligible individuals and families. Also, will assist eligible households in getting to meetings with the PRPHA.
3. Partnering service providers will establish windows of time for EHV applicants to complete intake interviews for EHV.
4. Partnering service providers will provide housing search assistance for eligible individuals and families.
5. Partnering service providers will provide counseling on compliance with rental lease requirements.
6. Partnering service providers will assess individuals and families who may require referrals for assistance on security deposits, utility hook-up fees, and utility deposits.
7. Partnering service providers will assess and refer individuals and families to benefits and supportive services, where applicable.

M
L-BV
G
KTB

CD

IV. PRPHA Roles and Responsibilities

PRPHA is responsible for all the administrative tasks for the EHV program in accordance with the EHV Operating Requirement Notice (PIH Notice 2021-15) and applicable HCV program regulations. These roles and responsibilities include but are not limited to the following:

1. Coordinate and consult with the CoC in developing the services and assistance to be offered under the EHV services fees.
2. Accept direct referrals for eligible individuals and families through the CoC Coordinated Entry System or from Victim Service Provider ("VSP").
3. Receive direct referral from outside the CoC if (a) the Coordinated Entry System does not have sufficient number of eligible families to refer to the PRPHA for the EHV program; or (b) the Coordinated Entry System does not identify families that may be eligible for EHV assistance because they are fleeing or attempting to flee domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking, or human trafficking.
4. Inform households on the waiting list of the availability of EHV by either posting the information to the website or providing public notice in the respective communities.
5. Use EHV if necessary, to facilitate an emergency transfer in accordance with the Violence Against Women Act ("VAWA") as outlined in the PRPHA's emergency transfer plan.
6. Work with CoC to manage preferences for EHV admissions.

7. Commit a sufficient number of staff and necessary resources to ensure that the application, certification, and voucher issuance processes are completed in a timely manner.
8. Commit a sufficient number of staff and resources to ensure that the inspections of units are completed in a timely manner.
9. Review applications for EHV, certifying program eligibility, and conducting annual recertifications for continue eligibility.
10. Ensure that housing provided to participating families is decent, safe, and sanitary housing by determining if units meet Housing Quality Standards. The PRPHA may approve these units for leasing contracts or contract with other qualified entities to perform the HQS inspection, which may include the CoC.
11. Designate personnel to serve as the lead EHV liaison.
12. Ensure housing search assistance is made available to EHV families during their initial housing search.
13. Accept self-certifications as the highest form of verification of admission when involving identity or income verification.
14. Explain and provide information about policies and procedures to current and prospective landlords and participants.
15. Conduct monitory assessment for performance and compliance of EHV participants and owners.
16. Help create customized plans to address or mitigate barriers that individual families may face in renting a unit with an EHV.
17. Provide owner recruitment and outreach.
18. Collaborate with CoC on strategies by establishing payment standards that increase pool of available high-quality housing units.
19. Provide landlord incentives to persuade them to lower barriers of race, gender, and disability.
20. Provide outreach to engage and collaborate with partner agencies and CoC's to help target the needs of people facing high Covid transmission and health risks due to congregate shelters, time limited non congregate shelters, and in unsheltered situations.
21. Maintain a separate waiting list for EHV referrals.
22. Work with partners to select from a menu of waivers to aide eligible households to eliminate barriers to housing and ensure expedited leasing.
23. Grant any and all reasonable accommodation requested to extend search term for individuals with disabilities.
24. Maximize lease-up of the EHV program within 12 months from award.
25. Guarantee that EHV referrals are expedited and result in a successful - lease-up within 60-90 days of voucher issuance. As such, the referrals received will be scheduled for an eligibility appointment within three business days of receipt of the referral. All of the eligible EHV participants who complete all required tasks (attending appointments/providing required documents) will be issued a voucher within the same week in which eligibility for participation is determined by the PRPHA. Requests for tenancy approvals received by the PRPHA will be scheduled for inspection within three (3) business days of the receipt of all completed documentation.
26. Comply with the provisions of this MOU.

MV
L-BV
G
Add
CD

V. COC ROLES AND RESPONSIBILITIES

The CoC roles and responsibilities include but are not limited to the following:

1. Designate and maintain a lead EHV liaison to communicate with the PRPHA.
2. Refer eligible individuals and families to the PRPHA using the community's coordinated entry system and provide documentation that the family qualifies under at least one of four one of the four eligible categories for EHV assistance.
3. Ensure equitable access to coordinated entry system and assess eligibility and prioritized households.
4. Use the coordinated entry system to help coordinate and manage crisis response system's resources in order to allow users to make consistent decisions based on available information to connect people to housing and service interventions efficiently and effectively.
5. Promote communitywide commitment to the goal of ending homelessness.
6. Support eligible individuals and households in completing and applying for supportive documentation to accompany admissions application to the PRPHA (i.e., Self-certifications, birth certificate, socials security card, etc.)
7. Attend EHV participant briefings when needed and aid family through the admissions process.
8. Assess all households referred for EHV for mainstream benefits and supportive services available to support eligible individuals and families through their transition.
9. Identify and provide supportive services to EHV families. (While EHV participants are not required to participate in services, the CoC should assure that services are available and accessible).
10. Provide funded services which may include street outreach, emergency shelter, transitional housing, rapid rehousing, and permanent supportive housing.
11. Provide written policies and procedures that include a process by which individuals and families may appeal coordinated entry decisions.
12. Comply with the provisions of this MOU.

VI. WAO ROLES AND RESPONSIBILITIES

The WAO roles and responsibilities include but are not limited to the following:

1. Designate and maintain a lead EHV liaison to communicate with the PRPHA.
2. Refer eligible individual and families to the PRPHA using the community's coordinated entry system and provide documentation that the family qualifies under at least one of four eligible categories one of the four eligible categories for EHV assistance.
3. Ensure equitable access to coordinated entry system, assess eligibility and prioritized households.
4. Use the coordinated entry system to help coordinate and manage crisis response system's resources in order to allow users to make consistent decisions based on available information to connect people to housing and service interventions efficiently and effectively.
5. Support eligible individuals and households in completing and applying for supportive documentation to accompany admissions application to the PRPHA (i.e., Self-certifications, birth certificate, socials security card, etc.)
6. Comply with the provisions of this MOU.

VII. THIRD PARTY ENTITY ROLES RESPONSIBILITIES

PRPHA and CoC encourage partnerships with Third Party Entities such as health and behavioral agencies like community health centers, state and country

behavioral agencies, state Medicaid agencies and managed care to explore funding opportunities and provide housing search/navigation. They hope to provide an ongoing tenancy and wrap-around supportive services for those who may benefit from such services to maintain housing stability.

VIII. REIMBURSEMENT OF THE PARTNERING SERVICES BY THE PRPHA

The PRPHA may use eligible funds to reimburse the Partnering Service Agencies (**Solo por Hoy, Inc. and Guara Bi, Inc.**) for eligible and reasonable expenses. Each EHV is granted only up to \$3,500.00 in funds to cover the reimbursement costs of service fees. **(Refer to Appendix B for EHV costs for reimbursement).**

The PRPHA will pay the partnering service agencies, for Services performed during the Term of this MOU, a maximum amount not to exceed \$360,500.00, Account Number 4190-04-000 from the CONTRACT SERVICES Funds. Such payment shall be compensation for all services required, performed and accepted under this MOU. The PRPHA has 90 business days to reimburse all eligible and reasonable activities. In order to receive reimbursement, the CoC must provide documentation of the cost of services. Such services for reimbursement include but are not limited to the following:

M

L.B.V.
G
RHS
CA

1. Provide housing search assistance.
2. Cover part or all of the holding fee for units where a fee is required by the owner after a tenant's application has been accepted but before lease is signed; The CoCs must provide any back up documentation to support this cost for reimbursement.
3. Provide a security deposit assistance and utility deposit assistance for the family to cover necessary expenses; The CoCs must provide any back up documentation to support this cost for reimbursement.
4. Provide assistance for some or all of the family's reasonable moving expenses as well as the first month's rent and any security deposit.
5. Assist the family with some or all of the cost of renter's insurance but only where the purchase of insurance is a condition of the lease.
6. Aid the family with some or all of the costs of acquiring essential household items as defined by the PRPHA; The CoCs must provide any back up documentation to support the cost for reimbursement purposes.
7. Cover any and all Housing Assistance Payments to landlords on behalf of participants. The CoCs must provide any back up documentation to support payments reimbursement.
8. Provide owner recruitment and outreach as well as incentive and retention payments; In order for the PRPHA to reimburse these, the CoC must send a separate proposal for explaining the services and costs prior to engagement of the recruitment program.
9. Cover any and all other eligible uses including tenant readiness services. These tenant readiness services include educating renters on how to acquire and keep descent housing. These services also include counseling, job training programs, employment assistance, and financial literacy courses.

The CoC program will assist to provide funding for tasks executed by nonprofit providers and state and local governments to quickly rehouse homeless individuals, families and minimize the trauma and dislocation that homelessness causes on individuals, families, and communities. The CoC funds may be used to cover many of the costs associated with the EHV program such as:

1. Covering coordinated entry costs with coordinated entry grants.

2. Assist with housing location by using rapid rehousing funds.
3. Use Homeless Emergency Solutions Grants (ESG)-CV funds for referrals, housing location, and other costs which may include outreach, essential services in emergency shelters, RRH, and homeless prevention.

IX. PROGRAM EVALUATION

The PRPHA, and CoC or designated CoC recipient agree to cooperate with HUD, provide requested data to HUD or HUD approved contractor delegated to discharge the responsibility of program evaluation protocols established by HUD or HUD contractor, including possible random assignment procedures.

X. NOTICES

- A. All notices required or permitted to be given under the Agreement shall be in writing, and shall be deemed given when delivered by hand or sent by registered or certified mail, return receipt requested, to the address as follows:

MT
L.D.V.
CB
AB
CA

To: PRPHA
Alejandro E. Salgado-Colón, Esq.
Administrator
Puerto Rico Public Housing Administration
PO Box 363188
San Juan, Puerto Rico 00936-3188

To: COC PR 502
Liz Mónica Lamboy-López Executive
Director, on behalf of Carmen González
Magaz PhD., Secretary of the Family
Department
Office 2602
Mercantil Plaza Building
Ponce de León Avenue
Hato Rey, Puerto Rico

To: WAO
Lersy Boria Vizcarrondo, Esq.
Apartado 11382
Estación Fernandez Juncos
San Juan, PR 00910-1382

To: Solo por Hoy, Inc.
Belinda Hill
Executive Director
#68 Calle Georgetti
San Juan, PR 00926

To: Guara Bi, Inc.
Cristian Duarte
COO
PO Box 6581
Caguas, PR 00726

- B. Either party may change its address by written notice to the other party. All other communications may be had in person with the PRPHA with an authorized representative of the Implementor.

XI. ENTIRE AGREEMENT

This MOU and all its Exhibits represents the entire and integrated agreement between PRPHA and the COC PR 502 and supersede all prior negotiations, representations, agreements and/or understandings of any kind. This MOU may be amended only by written document signed by both PRPHA and the COC PR 502.

XII. MODIFICATION OF MOU

Any modification of this MOU or additional obligation assumed by either party in connection with this Agreement shall be binding only if written and signed by both parties, and its authorized representatives.

XIII. BINDING EFFECT

PR
This Agreement shall be binding upon and shall inure to the benefit of the PRPHA and the COC PR 502, their successors and assigns.

XIV. ASSIGNMENT OF RIGHTS

L.B.V.
The rights of each party hereunder are personal to that party and may not be assigned or otherwise transferred to any other person, firm, corporation, or other entity without the prior, express, and written consent of the other parties.

XV. NON-WAIVER

CA
The failure or delay of either party to insist upon the performance of and/or the compliance with any of the terms and conditions of this MOU shall not be construed as a waiver of any such terms and conditions or the right to enforce compliance with such terms and conditions.

XVI. HEADINGS

The titles to the paragraphs of this MOU are solely for reference purposes and the convenience of the parties and shall not be used to explain, modify, simplify, or aid in the interpretation of the provisions of this Agreement.

XVII. SEVERABILITY

If any provision of this Agreement shall operate or would prospectively operate to invalidate the Agreement in whole or in part, then such provision only shall be deemed severed and the remainder of the Agreement shall remain operative and in full effect.

XVIII. OFFICE OF THE COMPTROLLER

Both Parties are compelled to comply with the regulations imposed by the Office of the Comptroller of Puerto Rico as to all contracts executed by and/or with public entities, by presenting this MOU for revision by the Comptroller, within fifteen (15) days from the date of its execution.

[SIGNATURES ON THE NEXT PAGE]

IN WITNESS THEREOF, the parties hereto execute this MOU in the place and on the date first above written.

PRPHA

**PUERTO RICO FAMILY DEPARTMENT
COC PR 502**



Alejandro E. Salgado, Colón, Esq.
Tax Id No: 660-46-6229



Carmen Ana González Magaz, PhD
Tax Id No: 660-70-7858

**WOMEN'S ADVOCATE OFFICE OF
PUERTO RICO**



Lersy Boria Vizcarrondo, Esq.
Tax Id No: 660-63-7549



Lisdel Flores Barger
President CoC PR-502

SOLO POR HOY, INC.

GUARA BI, INC.



Belinda Hill
Tax Id No: 660-72-3251



Cristian Duarte
Tax Id No: 660-70-5571

Appendix A- Definition of Terms:

Individuals and families who are homeless

Homeless means:

(1) An individual or family who lacks a fixed, regular, and adequate nighttime residence, meaning:

(i) An individual or family with a primary nighttime residence that is a public or private place not designed for or ordinarily used as a regular sleeping accommodation for human beings, including a car, park, abandoned building, bus or train station, airport, or camping ground.

(ii) An individual or family living in a supervised publicly or privately operated shelter designated to provide temporary living arrangements (including congregate shelters, transitional housing, hotels and motels paid for by charitable organizations or by federal, State, or local government programs for low-income individuals); or

(iii) An individual who is exiting an institution where he or she resided for 90 days or less and who resided in an emergency shelter or place not meant for human habitation immediately before entering that institution.

(2) An individual or family who will imminently lose their primary nighttime residence, provided that:

(i) The primary nighttime residence will be lost within 14 days of the date of application for homeless assistance.

(ii) No subsequent residence has been identified; and

(iii) The individual or family lacks the resources or support networks, e.g., family, friends, faith-based or other social networks, needed to obtain other permanent housing.

(3) Unaccompanied youth under 25 years of age, or families with children and youth, who do not otherwise qualify as homeless under this definition, but who:

(i) Are defined as homeless under section 387 of the Runaway and Homeless Youth Act (42 U.S.C. 5732a), section 637 of the Head Start Act (42 U.S.C. 9832), section 41403 of the Violence Against Women Act of 1994 (42 U.S.C. 14043e-2), section 330(h) of the Public Health Service Act (42 U.S.C. 254b(h)), section 3 of the Food and Nutrition Act of 2008 (7 U.S.C. 2012), section 17(b) of the Child Nutrition Act of 1966 (42 U.S.C. 1786(b)), or section 725 of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11434a);

(ii) Have not had a lease, ownership interest, or occupancy agreement in permanent housing at any time during the 60 days immediately preceding the date of application for homeless assistance;

(iii) Have experienced persistent instability as measured by two moves or more during the 60-day period immediately preceding the date of applying for homeless assistance; and

(iv) Can be expected to continue in such status for an extended period of time because of chronic disabilities; chronic physical health or mental health conditions; substance addiction; histories of domestic violence or childhood abuse (including neglect); the presence of a child or youth with a disability; or

h
B-V
CF
AS
CD

two or more barriers to employment, which include the lack of a high school degree or General Education Development (GED), illiteracy, low English proficiency, a history of incarceration or detention for criminal activity, and a history of unstable employment.

The meaning of "at-risk of homelessness" is as such term is defined in section 401(1) of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11360(1)), which is codified in HUD's Continuum of Care Program regulations at 24 CFR 578.3 and reads as follows:

B. Individuals or families who are at-risk of homelessness

At risk of homelessness.

(1) An individual or family who:

(i) Has an annual income below 30 percent of median family income for the area, as determined by HUD;

(ii) Does not have sufficient resources or support networks, e.g., family, friends, faith-based or other social networks, immediately available to prevent them from moving to an emergency shelter or another place described in paragraph (1) of the "Homeless" definition above; and

(iii) Meets one of the following conditions:

(A) Has moved because of economic reasons two or more times during the 60 days immediately preceding the application for homelessness prevention assistance;

(B) Is living in the home of another because of economic hardship;

(C) Has been notified in writing that their right to occupy their current housing or living situation will be terminated within 21 days of the date of application for assistance;

(D) Lives in a hotel or motel and the cost of the hotel or motel stay is not paid by charitable organizations or by federal, State, or local government programs for low-income individuals;

(E) Lives in a single-room occupancy or efficiency apartment unit in which there reside more than two persons, or lives in a larger housing unit in which there reside more than 1.5 people per room, as defined by the U.S. Census Bureau;

(F) Is exiting a publicly funded institution, or system of care (such as a health-care facility, a mental health facility, foster care or other youth facility, or correction program or institution); or

(G) Otherwise lives in housing that has characteristics associated with instability and an increased risk of homelessness, as identified in the recipient's approved consolidated plan.

(2) A child or youth who does not qualify as "homeless" under this section, but qualifies as "homeless" under section 387(3) of the Runaway and Homeless Youth Act (42 U.S.C. 5732a(3)), section 637(11) of the Head Start Act (42 U.S.C. 9832(11)), section 41403(6) of the Violence Against Women Act of 1994 (42 U.S.C. 14043e-2(6)), section 330(h)(5)(A) of the Public Health Service Act (42 U.S.C. 254b(h)(5)(A)), section 3(m) of the Food and Nutrition Act of 2008 (7 U.S.C.

mm
L.B.V.
OS
JTB
CD

2012(m)), or section 17(b)(15) of the Child Nutrition Act of 1966 (42 U.S.C. 1786(b)(15)); or

(3) A child or youth who does not qualify as "homeless" under this section, but qualifies as "homeless" under section 725(2) of the McKinney-Vento Homeless Assistance Act (42 U.S.C. 11434a(2)), and the parent(s) or guardian(s) of that child or youth if living with her or him.

C. Individuals or families who are fleeing, or attempting to flee, domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking or human trafficking

This category is composed of any individual or family who is fleeing, or is attempting to flee, domestic violence, dating violence, sexual assault, stalking, or human trafficking. This includes cases where a HUD-assisted tenant reasonably believes that there is a threat of imminent harm from further violence if they remain within the same dwelling unit, or in the case of sexual assault, the HUD-assisted tenant reasonably believes there is a threat of imminent harm from further violence if they remain within the same dwelling unit that they are currently occupying, or the sexual assault occurred on the premise during the 90- day period preceding the date of the request for transfer.

Domestic violence includes felony or misdemeanor crimes of violence committed by:

W
F-BV
G
AB
CA

1. a current or former spouse or intimate partner of the victim (the term "spouse or intimate partner of the victim" includes a person who is or has been in a social relationship of a romantic or intimate nature with the victim, as determined by the length of the relationship, the type of the relationship, and the frequency of interaction between the persons involved in the relationship),
2. a person with whom the victim shares a child in common,
3. a person who is cohabitating with or has cohabitated with the victim as a spouse or intimate partner,
4. a person similarly situated to a spouse of the victim under the domestic or family violence laws of the jurisdiction receiving grant monies, or
5. any other person against an adult or youth victim who is protected from that person's acts under the domestic or family violence laws of the jurisdiction.

Dating violence means violence committed by a person:

1. Who is or has been in a social relationship of a romantic or intimate nature with the victim; and
2. Where the existence of such a relationship shall be determined based on a consideration of the following factors:
 1. The length of the relationship;
 2. The type of relationship; and
 3. The frequency of interaction between the persons involved in the relationship.

Sexual assault means any nonconsensual sexual act proscribed by Federal, Tribal, or State law, including when the victim lacks capacity to consent.

Stalking means engaging in a course of conduct directed at a specific person that would cause a reasonable person to:

(1) Fear for the person's individual safety or the safety of others; or (2) Suffer substantial emotional distress.

Human trafficking includes both sex and labor trafficking, as outlined in the Trafficking Victims Protection Act of 2000 (TVPA), as amended (22 U.S.C. § 7102). These are defined as:

Sex trafficking means the recruitment, harboring, transportation, provision, obtaining, patronizing, or soliciting of a person for the purpose of a commercial sex act, in which the commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion, or in which the person induced to perform such act has not attained 18 years of age; (and)

Labor trafficking means the recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for labor or services, through the use of force, fraud, or coercion for the purpose of subjection to involuntary servitude, peonage, debt bondage, or slavery.

D. Individuals or families who are recently homeless

This category is composed of individuals and families determined by the CoC or its designee to meet the following definition.

Recently homeless is defined as individuals and families who have previously been classified by a member agency of the CoC as homeless but are not currently homeless as a result of homeless assistance (financial assistance or services), temporary rental assistance or some type of other assistance, and where the CoC or its designee determines that the loss of such assistance would result in a return to homelessness or the family having a high risk of housing instability. Examples of households that may be defined as recently homeless by the CoC include, but are not limited to, participants in rapid rehousing, and permanent supportive housing.

Individuals and families classified as recently homeless must be referred by the CoC or its designee.

W
F.B.V.
G
H
A

APPENDIX B
SERVICE FEES FOR REIMBURSEMENT

The EHV program provides funding for service fees and other eligible expenses to prepare for and respond to coronavirus to facilitate the leasing of the emergency housing vouchers, such as security deposit assistance and other costs related to retention and support of participating owners. The PRPHA will reimburse the eligible service fees that CoC's provide to EHV participants. These fees may only be used for EHV administration and eligible expenses. Furthermore, the CoC must provide receipts and/or documentation of the services provided in order to receive reimbursement.

MZ
The amount assigned to the PRPHA will be equal to \$3,500 for each EHV allocated to the PRPHA. The service fee amount is not tied to each voucher, but instead is the combined total of the services fees that are available to create services that will best address the leasing challenges faced by the EHV eligible families in the PRPHA's community.

L.P.V.
CJ
AB
The service fee eligible uses are designed to prevent and respond to coronavirus by facilitating the leasing of the EHV's, which will provide vulnerable individuals and families a much safer housing environment to minimize the risk of coronavirus exposure or spread. Specifically, individuals and families who are homeless or at-risk of homelessness are often living in conditions that significantly increase the risk of exposure to coronavirus in addition to other health risks.

CD
The services fees fall into four main components comprised of specific activities:

A. Housing Search Assistance.

The CoC's may receive reimbursement for service fees used to provide the required housing search assistance to EHV families during their initial housing search. Housing search assistance is a broad term which may include many activities such as but not limited to helping a family identify and visit potentially available units during their housing search, helping to find a unit that meets the household's disability-related needs, providing transportation and directions, assisting with the completion of rental applications and PRPHA forms, and helping to expedite the EHV leasing process for the family.

Housing Search Assistance may include but is not limited to providing staff to ID property locations or get the property documentation. Covering the costs for these CoCs to visit the properties.

The reasonable costs for these expenses is \$10.95 per hour, based on the Executive Order 13658: Federal Minimum Wage for Contractors. For claim this reimbursement the CoCs have to provide a Time Sheet that reflects the services hours to the participant family.

It may also include average cost for moving and packing materials for the participants. These moving expenses include move-in fees and deposits. The CoC may provide assistance for some or all of the family's reasonable moving

expenses when they initially lease a unit with the EHV. The CoC may not provide moving expenses assistance for subsequent moves unless the family is required to move for reasons other than something the family did or failed to do (e.g., the CoC is terminating the HAP contract because the owner did not fulfill the owner responsibilities under the HAP contract or the owner is refusing to offer the family the opportunity to enter a new lease after the initial lease term, as opposed to the family choosing to terminate the tenancy in order to move to another unit), or a family has to move due to domestic violence, dating violence, sexual assault, or stalking, for example.

The reasonable average moving costs within the metropolitan area is based off the number of rooms in the unit. The number of units will determine the number of boxes a contractor would have to move for the tenant. These may include the following:

Moving Expense (1 Bedroom)	\$600.00
Moving Expense (2 Bedroom)	\$650.00
Moving Expense (3 Bedroom)	\$700.00
Moving Expense (4 Bedroom)	\$750.00

If the family themselves don't have a method of transportation, they will be given \$50.00 to \$75.00 to cover their transportation fees.

B. Security Deposit/Utility Deposit/Rental Application/Holding Fee Uses

The CoC's may receive reimbursement for service fees that have been used to provide the following:

- 1) Application fees/non-refundable administrative or processing fees/refundable application deposit assistance.
- 2) Holding fees. It is in the discretion of the CoC to cover part or all of the holding fee for units where the fee is required by the owner after a tenant's application has been accepted but before the lease signing. The CoC and owner must agree how the holding fee gets rolled into the deposit, and under what conditions the fee will be returned. In general, owners need to accept responsibility for making needed repairs to a unit required by the initial housing quality standards (HQS) inspections and can only keep the holding fee if the client is at fault for not entering into a lease.
- 3) Security deposit assistance. The CoC may provide security deposit assistance for the family. The amount of the security deposit assistance may not exceed the lesser of two months' rent to owner, the maximum-security deposit allowed under applicable state and/or local law, or the actual security deposit required by the owner. The CoC may choose to pay the security deposit assistance directly to the owner or may pay the assistance to the family, provided the CoC verifies the family paid the security deposit. The CoC may place conditions on the security deposit assistance, such as requiring the

owner or family to return the security deposit assistance to the CoC at the end of the family's tenancy (less any amounts retained by the owner in accordance with the lease). Security deposit assistance returned to the CoC must be used for either services fee eligible uses or other EHV administrative costs.

- 4) Utility deposit assistance/utility arrears. The CoC may provide utility deposit assistance for some or all of the family's utility deposit expenses. The deposit for LUMA in Puerto Rico is \$50.00 for public housing residents. Assistance can be provided for deposits (including connection fees) required for the utilities to be supplied by the tenant under the lease. The CoC may choose to pay the utility deposit assistance directly to the utility company or may pay the assistance to the family, provided the PRPHA verifies the family paid the utility deposit. The CoC may place conditions on the utility deposit assistance, such as requiring the utility supplier or family to return the utility deposit assistance to the CoC at such time the deposit is returned by the utility supplier (less any amounts retained by the utility supplier). In addition, some families may have large balances with gas, electric, water, sewer, or trash companies that will make it difficult if not impossible to establish services for tenant-supplied utilities. The CoC may also provide the family with assistance to help address these utility arrears to facilitate leasing. Utility deposit assistance that is returned to the CoC must be used for either services fee eligible uses or other EHV administrative costs.

M
F.B.V.
CA

The CoC will assist the participant in setting up an appointment at the regional LUMA office to begin the application process in order to receive electricity at their unit. The CoC will help in ascertaining and providing the necessary documentation throughout the application process including landlord/tenant contract and applicant's social security number.

The reasonable average costs for these expenses may include the following:

One month rent	\$439.00
(Based off of 1-bedroom FMR in San Juan; higher amounts authorized based on rent reasonableness determination for bedroom size)	
Security deposit (generally equal to one month's rent)	\$439.00
Utilities – Water Deposit	\$75.00
Utilities - Electric Deposit	\$150.00

C. Owner-related uses

The CoC's may receive reimbursement for service fees that have been used to provide the following owner-related uses:

- 1) Owner recruitment and outreach. The CoC may use the service fee funding to conduct owner recruitment and outreach specifically for

EHVs. In addition to traditional owner recruitment and outreach, activities may include conducting pre-inspections or otherwise expediting the inspection process, providing enhanced customer service, and offering owner incentive and/or retention payments. In order to be reimbursed the CoC must provide a proposal specifying the type of recruitment and outreach as well as the costs. The proposal needs to be approved prior to a request for reimbursement.

D. Other Eligible Expenses

M
LBV
OK
AB
CA

- 1) Tenant-readiness services. The CoC may use the services fee funding to help create customized plans to address or mitigate barriers that individual families may face in renting a unit with an EHV, such as negative credit, lack of credit, negative rental or utility history, or to connect the family to other community resources (including COVID-related resources) that can assist with rental arrears.
- 2) Essential household items. The CoC may use the services fee funding to assist the family with some or all of the costs of acquiring essential household items as defined by the PRPHA (e.g., tableware, bedding, etc, cooking appliances, etc.).
- 3) Renter's insurance if required by the lease. The CoC may use the services fee funding to assist the family with some or all of the cost of renter's insurance, but only in cases where the purchase of renter's insurance is a condition of the lease.

The reasonable average costs for these expenses may include the following:

Mattress	\$300.00
Mattress frame	\$100.00
Bedding Sets	\$30.00
Silverware/Cooking Appliances	\$30.00
Dining Table	\$80.00
Chairs	\$40.00
Microwave	\$50.00
Refrigerator	\$300.00



LEY 40-2021

SENADO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO 00901

Yo, **Yamil Rivera Vélez**, Secretario del Senado de Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que el P. del S. 130, titulado:

“LEY

Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir un nuevo inciso (f) a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado; añadir nuevas circunstancias constitutivas de los delitos; enmendar la Sección 2 y Sección 3 de la Ley 157-2020 para reconocer el delito de feminicidio y transfeminicidio en la recolección de estadísticas; y para otros asuntos relacionados.”

ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes en la forma que expresa el ejemplar que se acompaña.

PARA QUE ASI CONSTE, y para notificar al Gobernador de Puerto Rico, expido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico, el día veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintiuno y estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico.


Yamil Rivera Vélez
Secretario del Senado

ANEJO B

(P. del S. 130)

LEY

Para enmendar el Artículo 93(e) y añadir un nuevo inciso (f) a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de reconocer y establecer el feminicidio y transfeminicidio como conductas que constituyen el delito de asesinato en primer grado; añadir nuevas circunstancias constitutivas de los delitos; enmendar la Sección 2 y Sección 3 de la Ley 157-2020 para reconocer el delito de feminicidio y transfeminicidio en la recolección de estadísticas; y para otros asuntos relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Puerto Rico lleva décadas mostrando un aumento alarmante en muertes violentas de mujeres y mujeres transgénero. Eventos recientes como el secuestro y muerte violenta de la joven Rosimar Rodríguez Gómez de Toa Baja y de la joven transgénero Michelle Ramos Vargas en San Germán son solo ejemplos tristes de una ola de violencia contra las mujeres que no se detiene, en buena parte por falta de acción del gobierno para visibilizar y tratar las causas del problema.

Las mujeres han sido y son objeto de múltiples formas de discrimen que violan los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana. Ya desde el año 1992, el Comité para la Eliminación del Discrimen contra la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas ("CEDAW", por sus siglas en inglés) identificó la violencia basada en el género como una de las manifestaciones del discrimen cuya causa principal es la desigualdad de género, ello es, las relaciones asimétricas de poder entre los hombres y las mujeres. Este tipo de violencia "constituye una forma de discrimen que impide gravemente que la mujer goce de derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres" (Comité CEDAW, Recomendación General Núm. 19, La violencia contra la mujer, Undécimo Período de Sesiones, 1992).

La Organización Mundial de la Salud (WHO) en el 2012 catalogó muerte violenta de las mujeres por razones de género como "la forma más extrema de la violencia contra la mujer". Ocurre en el ámbito familiar o en el espacio público, y puede ser perpetrada por particulares o ejecutada o tolerada por los agentes del Estado. Constituye una violación de varios derechos fundamentales de las mujeres, tales como el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la libertad personal. También infringe derechos consagrados por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la cual indica en la Sección 1 de su Carta de Derechos que: "No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social,

ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán esos principios de esencial igualdad humana.”

De otra parte, en el informe *Violencia contra Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex en América* (CIDH 2015) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga una importancia fundamental a la obligación estatal de “desarrollar medidas de recolección de datos para estudiar y evaluar el alcance y las tendencias de la violencia por prejuicio contra las personas LGBTI” (CIDH, 2015: párrafo 18) y la relaciona directamente con la impunidad: “Cuando los Estados no realizan investigaciones exhaustivas e imparciales respecto de los casos de violencia contra las personas LGBTI, se genera una impunidad frente a estos crímenes que envía un fuerte mensaje social de que la violencia es condonada y tolerada, lo que puede a su vez generar más violencia y conduce a las víctimas a desconfiar en el sistema de justicia”. (CIDH, 2015: párrafo 22)

En Puerto Rico existe y ha existido una marcada indolencia de las diversas agencias gubernamentales tales como la Policía, el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, el Departamento de Salud, el Negociado de Ciencias Forenses y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en documentar rigurosamente la situación de los feminicidios en Puerto Rico y divulgar tal información a la ciudadanía. Como reacción a esa indolencia las organizaciones Proyecto Matria y Kilómetro Cero publicaron en el año 2018 su informe *La persistencia de la indolencia: Feminicidios en Puerto Rico 2014-2018*. En el mismo, concluyeron que “la recolección y análisis de información sobre feminicidios son herramientas fundamentales para determinar su magnitud, entender sus patrones y tendencias y establecer comparaciones internacionales que sirvan de instrumentos para evaluar los éxitos y los fracasos de los esfuerzos de prevención. *Id.*, p. 9.

En su estudio *El feminicidio en Puerto Rico 2000-2014: Características sociodemográficas de la víctima y el evento* (2018), la demógrafa Wandimar Matos Rosario concluyó que “[e]n el estudio de los homicidios, hay que segregar por sexo, porque los asesinatos ocurren, en su mayoría, por la carga que se le atribuye al género, y considerando las limitaciones e invisibilidades de la categoría ‘sexo’ en los estudios estadísticos. No podemos hablar de homicidios si no hablamos de las identidades de género, sus roles y sus violencias. Por eso, los asesinatos de las mujeres hay que nombrarlos como tal, como feminicidios”. Matos estableció además que los homicidios entre hombres también deben ser analizados según los roles de género y el concepto de masculinidad enraizado en la sociedad patriarcal. De igual forma, considerar a mujeres trans como un grupo diferenciado permite reconocer la especificidad de sus identidades y expresiones de género y atender las particularidades de los crímenes perpetrados contra ellas. En particular, permite distinguir estos crímenes de aquellos cometidos en virtud de la orientación sexual de las víctimas (“crímenes de odio”).

El 28 de diciembre de 2020 se aprobó la Ley 157-2020, la cual enmendó el Artículo 93, *supra*, para incluir circunstancias adicionales bajo las cuales se entenderá cometido el asesinato en primer grado cuando la víctima sea una mujer, ordenar la creación de

protocolos para casos de muertes de mujeres en forma violenta y ordenar además el establecimiento de un sistema de compilación de estadísticas. Aunque la propuesta de la Gobernadora Vázquez Garced fue un intento de avance en la protección de la seguridad de las mujeres, la misma se quedó corta al no reconocer ni atender la situación de las mujeres transgénero. Además, al final del proceso legislativo, se aprobó una ley que deja a Puerto Rico con un Código Penal que pretende proteger los derechos de la mujer, pero no reconoce el término "feminicidio" y mucho menos el término "transfeminicidio".

Mientras no existan mecanismos confiables y comparables para la recolección de datos para cierto tipo de crimen, no existirán formas apropiadas para entenderlo ni estrategias efectivas para combatirlo. Véase, *Academic Council on the United Nations System: Establishing a Femicide Watch in Every Country* (2017). Tales mecanismos no pueden establecerse sin que se dé el primer paso: llamar al delito por su nombre apropiado y distinguir claramente sus elementos constitutivos. Por eso, esta Asamblea Legislativa da ese primer paso mediante la presente Ley, confiando en que a la misma le seguirán medidas adicionales para proteger y defender la vida y los derechos de las mujeres y mujeres transgénero en nuestra isla.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 93 (e) de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", para que se lea como sigue:

"Artículo 93- Grados de Asesinato.

Constituye asesinato en primer grado:

(a) ...

...

(e) Cuando ocurran las circunstancias establecidas en este inciso, el delito de asesinato se identificará como feminicidio. Cualquier sentencia condenatoria emitida por razón de asesinato en esta modalidad de feminicidio indicará tal hecho específicamente.

Se considerará feminicidio todo asesinato en el cual la víctima es una mujer cuando al cometerse el delito concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- (1) La muerte haya ocurrido al perpetrarse algún delito de maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad o agresión sexual conyugal contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la "Ley para la Protección e Intervención de la Violencia Doméstica";
- (2) La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- (3) El victimario (a) haya infligido en la víctima lesiones o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

- (4) Existan antecedentes penales por cualquier delito relacionado con violencia y/o agresiones o en el ámbito familiar, laboral o escolar, académico o cualquier otro, del victimario en contra de la víctima;
- (5) El sujeto haya realizado actos o manifestaciones esporádicas o reiteradas, de violencia en contra de la víctima, independientemente de que los hechos fueran denunciados o no por la víctima;
- (6) El victimario haya tenido o haya intentado establecer o restablecer con la víctima una relación sentimental, conyugal, de pareja, amistad, convivencia, intimidación, afectiva, de noviazgo o de confianza; o cualquier otra relación de hecho;
- (7) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, acecho o lesiones del victimario en contra de la víctima;
- (8) El victimario (a) haya privado a la víctima de establecer cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o visual, con otras personas en cualquier periodo de tiempo previo a la privación de la vida;
- (9) El victimario (a) haya abandonado, expuesto o depositado el cuerpo de la víctima en un lugar público;
- (10) Exista o haya existido entre el victimario y la víctima, una relación laboral, docente o cualquier otra que implique superioridad, ventaja o establezca una relación de poder a favor del victimario (a);
- (11) El asesinato haya ocurrido en presencia de las hijas o hijos de la víctima.

(f) Cuando ocurran las circunstancias establecidas en este inciso, el delito de asesinato se identificará como transfeminicidio. Cualquier sentencia condenatoria emitida por razón de asesinato en esta modalidad de transfeminicidio indicará tal hecho específicamente.

Se considerará transfeminicidio todo asesinato en el cual la víctima sea una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, no corresponda con aquella asignada al nacer, cuando al cometerse el delito concurre alguna de las siguientes circunstancias:

- (1) La muerte haya ocurrido al perpetrarse algún delito de maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante restricción de la libertad o agresión sexual conyugal contemplados en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como "Ley para la Protección e Intervención con la Violencia Doméstica";
- (2) La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- (3) El victimario (a) haya infligido a la víctima lesiones o mutilaciones, previas o posteriores, a la privación de la vida o actos de necrofilia;

- (4) Existan antecedentes penales por cualquier delito relacionado con violencia y/o agresiones en el ámbito familiar, laboral, escolar, académico o cualquier otro, del victimario en contra de la víctima;
- (5) El sujeto haya realizado actos o manifestaciones, esporádicas o reiteradas, de violencia en contra de la víctima, independientemente de que los hechos fueran denunciados o no por la víctima;
- (6) El victimario haya tenido o haya intentado establecer o restablecer con la víctima una relación sentimental, conyugal, de pareja, amistad, convivencia, intimidad, afectiva, de noviazgo o de confianza, o cualquier otra relación de hecho;
- (7) Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso, acecho o lesiones del victimario en contra de la víctima;
- (8) El victimario (a) haya privado a la víctima de establecer cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o visual, con otras personas en cualquier periodo de tiempo previo a la privación de la vida;
- (9) El victimario (a) haya abandonado, expuesto o depositado el cuerpo de la víctima en un lugar público;
- (10) Exista o haya existido entre el victimario y la víctima, una relación laboral, docente o cualquier otra que implique superioridad, ventaja o establezca una relación de poder a favor del victimario (a);
- (11) El asesinato haya ocurrido en presencia de las hijas o hijos de la víctima.

Sección 2.- Se enmienda la Sección 2 de la Ley 157-2020, para que se lea como sigue:

“Sección 2.- Protocolo para casos de feminicidio y transfeminicidio.

El Departamento de Justicia, en conjunto con el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, desarrollarán un protocolo de investigación para los casos de feminicidio y transfeminicidio según definidos en el Artículo 93 de la Ley 146-2012, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, según enmendada y podrán utilizar como guía las recomendaciones del Modelo de Protocolo Latinoamericano de la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, elaborado por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y/o cualquier otra guía reconocida sobre el particular. El protocolo deberá estar listo en o antes de los siguientes ciento veinte (120) días a partir de la aprobación de esta Ley y este podrá ser modificado cuando se estime necesario.”

Sección 3.- Se enmienda la Sección 3 de la Ley 157-2020 para que se lea como sigue:

“Sección 3.- Compilación y manejo de estadísticas.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Salud y el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico, establecerá un sistema de compilación y manejo de datos estadísticos sobre los casos de feminicidio y transfeminicidio según definidos en el Artículo 93 de la Ley 146-2012, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", según enmendada. Este sistema deberá estar listo en o antes de los siguientes ciento ochenta (180) días a partir de la aprobación de esta Ley. La información estadística será pública y deberá actualizarse mensualmente a partir de que se haya establecido el sistema de compilación de datos."

Sección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.



Presidente de la Cámara



Presidente del Senado

Aprobada en 27 agosto 2021



Gobernador

Este P. de 5 Núm 130

Fue recibida por el Gobernador

Hoy 16 de agosto

De 2021 A las 1:54.P.M.



Asesor



LEY 32 -20 21

SENADO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

**EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO 00901**

Yo, **Yamil Rivera Vélez**, Secretario del Senado de Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que el **P. del S. 358**, titulado:

“LEY

Para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la ley deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público, así como un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.”

ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes en la forma que expresa el ejemplar que se acompaña.

PARA QUE ASI CONSTE, y para notificar al Gobernador de Puerto Rico, expido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico, el día veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintiuno y estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico.


Yamil Rivera Vélez
Secretario del Senado

ANEJO C

Este P. de 5 Núm 358

Fue recibida por el Gobernador

Hoy 16 de agosto

De 2021 A las 1:54 P.M.


Asesor

(P. del S. 358)

LEY

Para enmendar el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de establecer que en toda vista de causa probable para arresto por cualquiera de los delitos establecidos en la ley deberá estar presente, sin discreción alguna, un representante del Ministerio Público, así como un intercesor o intercesora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 25 de enero de 2021 fue promulgada la Orden Ejecutiva 2021-013, que declara un estado de emergencia en Puerto Rico por el aumento de casos de violencia doméstica y de género. La Orden Ejecutiva 2021-013, define violencia de género como “...conductas que causan daño físico, sexual o psicológico a otra persona motivado por los estereotipos de género creados por los hombres y las mujeres. Cuando se habla de estereotipos de género, se refiere a las opiniones o prejuicios basados en las funciones sociales o relaciones de poder de un género sobre otro que determinada cultura le asigna al hombre o a la mujer”.

Lo cierto es que desde hace varios años hemos estado sufriendo una epidemia de casos de violencia de género que le ha quitado la vida a cientos de mujeres puertorriqueñas. Muchos de estos casos han estado inmersos en alguna instancia en el proceso judicial, ya sea mediante órdenes de protección o en la radicación de cargos criminales. En estos casos, el inicio del proceso ante los tribunales comienza con la primera vista para determinar si la denuncia y el testimonio vertido ante un Juez o Jueza tiene todos los elementos necesarios para determinar que hay causa para arrestar a la persona y continuar el proceso penal hasta el día del juicio. Generalmente, a las vistas de causa probable el Ministerio Público no está obligado a comparecer y solamente asisten el agente investigador y la persona víctima. Sin embargo, en aquellos casos presentados por violaciones a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Intervención y Prevención de la Violencia Doméstica”, el Artículo 3.10 requiere que el Ministerio Público esté presente cuando exista grave daño corporal o cuando el delito se cometiere luego de mediar una orden de protección, y en casos de agresión sexual. La misma disposición también le da al Departamento de Justicia la discreción de enviar representación del Ministerio Público a cualquier otro caso presentado por violación a la Ley 54, siempre y cuando los recursos lo permitan. Así las cosas, amparado en esa discreción que brinda la Ley, el Departamento de Justicia rara vez envía sus fiscales a comparecer a una vista de determinación de causa probable.

La presencia de un o una fiscal en las vistas de causa probable ayudaría a brindarle al proceso más certeza y seguridad para las víctimas, al contar con la

presencia de funcionarios y funcionarias con la pericia legal necesaria en estos casos. Las razones por las cuales se pudiera determinar que no hay causa probable para arrestar pueden ser diversas, incluyendo que en efecto no se cometió el delito. Sin embargo, existen situaciones relacionadas al manejo y presentación de la evidencia requerida que se pueden subsanar con la presencia del Ministerio Público. Por ejemplo, casos en los que la víctima esté afectada emocionalmente que no pueda presentar un testimonio que identifique los elementos del delito, o cuando los agentes investigadores no presentan cierta prueba requerida. La presencia de un o una fiscal en dicho proceso sería de gran beneficio en esas situaciones para poder guiar y dirigir el desfile de prueba, además de que les permitiría identificar desde el inicio problemas fácticos o jurídicos que se pueden atender, de ser subsanables, para que se presente un caso conforme a derecho y evitar su desestimación.

La presente ley tiene la intención de enmendar el Artículo 3.10 de manera que el Ministerio Público comparezcan a la vista de causa probable para arresto, en todos los casos que se presenten por violaciones a la Ley 54, y no a únicamente a ciertos delitos o a discreción del Departamento de Justicia. La misma declaración de emergencia establece que “[c]ontamos con legislación vigente para atender la violencia, sin embargo, es necesaria la ejecución, fiscalización y seguimiento de esas medidas para lograr cambios en pro de la protección de la ciudadanía”.

Así también, la Sección 15 de la Orden Ejecutiva ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, —con el apoyo de la AAFAF— a identificar los fondos necesarios dentro del Presupuesto Certificado, programas federales, la Reserva de Emergencia y/o cualquier otro fondo disponible, para cumplir con los objetivos de la declaración de emergencia. Así también ordenó a toda agencia gubernamental, sin excepción, que para el año fiscal 2021-2022 en adelante, identifique como parte de su presupuesto, una partida para asignar recursos dirigidos a cumplir con los objetivos de la declaración de emergencia y/o programas de prevención y atención de la violencia de género. La Orden Ejecutiva 2021-013 nos dice que los recursos antes mencionados incluirán, sin limitarse, programas de prevención, orientación, protección y medidas de seguridad dirigidos a combatir la violencia de género.

En ese sentido ante la emergencia por violencia de género que vive nuestro país, todas las agencias concernidas deben ajustar sus planes operacionales y de distribución de recursos. La falta de recursos no puede ser una excusa para que no haya representación legal del Ministerio Público en todos los casos que se radiquen por violación a la Ley 54. En ese sentido la presente legislación deja claro que existe un deber ministerial del Departamento de Justicia en asignar fiscales a esas vistas de determinación de causa probable para arresto.

Esta Asamblea Legislativa, amparada en su poder de razón de estado para salvaguardar la vida y el orden público, entiende que la presente legislación es necesaria para la protección de la mujer puertorriqueña cuyo peligro es claro, real y palpable ante la alta incidencia de violencia de género y feminicidios en el país. Que la

frase “Ni una más” no sea un mero decir, y se convierta en acción por todas las instituciones que componemos el Estado Libre Asociado en unión a la sociedad civil.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 3.10 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a fin de que se lea como sigue:

“Artículo 3.10 — Asistencia a la Víctima de Maltrato.

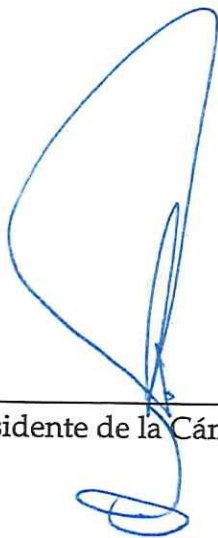
Siempre que un oficial del orden público interviniere con una persona que alega ser víctima de maltrato, independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio de dicha persona, deberá tomar todas aquellas medidas que estime necesarias para evitar que dicha persona vuelva a ser maltratada. Entre otras, deberá realizar las gestiones siguientes:

- (a) ...
- (b) ...
- (c) ...
- (d) ...
- (e) ...

El Ministerio Público tendrá el deber de comparecer a toda vista de determinación de causa probable para arresto en los casos de naturaleza penal presentados al amparo de esta Ley, sin discreción alguna, incluyendo las violaciones a las órdenes de protección según establece el Artículo 2.8 de esta Ley.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres tendrá que proveer un intercesor o intercesora para que comparezca dicho procedimiento judicial.”

Sección 2.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.



Presidente de la Cámara



Presidente del Senado

Aprobada en 24 agosto 2021



Gobernador



LEY 21 -20 21

Yo, LCDO. JAVIER GÓMEZ CRUZ, Secretario de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que el P. de la C. 547, titulado

"Ley

Para crear la "Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito, la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo o sexual; establecer penalidades; y para otros fines."

ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la forma que expresa el documento que se acompaña.

PARA QUE ASÍ CONSTE, y para notificar al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, expido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico al primer (1) día del mes de julio del año dos mil veintiuno y estampo en ella el sello de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Lcdo. Javier Gómez Cruz
Secretario

ANEJO D

(P. de la C. 547)

LEY

Para crear la "Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito, la divulgación y publicación de cualquier material explícito de carácter íntimo o sexual; establecer penalidades; y para otros fines.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Puerto Rico, como en muchos otros países a nivel mundial, vivimos asediados por la tecnología. La tecnología está presente en todo lo que hacemos, incluso en los actos más íntimos de nuestras vidas. Aun cuando la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa reconocen la importancia del derecho a la intimidad, y que no es posible desarrollar legislación que atente contra este fundamental derecho que tiene toda persona a realizar las prácticas sexuales que así estime pertinente, sí resulta pertinente actuar contra el uso irresponsable que le han dado muchas personas al material explícito que se toma en la intimidad de sus relaciones.

Con el acelerado crecimiento y evolución de la industria tecnológica y las telecomunicaciones, los medios de comunicación tradicionales han sido rebasados por los medios de comunicación digital, principalmente los celulares, las computadoras y tabletas. Con la proliferación de los medios digitales de comunicación naturalmente han cambiado las comunicaciones interpersonales, y la legislación actual ha resultado insuficiente para la adecuada protección de la información privada. La era digital y la era de información vinieron acompañadas del fenómeno de las plataformas sociales y las plataformas de intercambio de todo tipo de documentos, que gozan de una gran participación y que facilitan el intercambio de documentos digitales entre sus usuarios. Estos documentos suelen ser de naturaleza íntima, por lo que gozan de la más alta confidencialidad.

Más recientemente, las autoridades estatales y federales han observado un incremento en la modalidad de la conducta conocida como *sextorsion*. Esta conducta se realiza cuando una persona amenaza o extorsiona a otra con la divulgación o publicación de un material de contenido íntimo, privado o comprometedor. También hemos sido testigos de víctimas de la divulgación abusiva de material íntimo privado, tomado con el debido consentimiento, pero para el cual no existe autorización de divulgación. Esto ha ocurrido con la única intención de hacer daño y ridiculizar a una, o todas, las partes involucradas en la grabación o toma del documento digital. Todas estas acciones suelen someter a las víctimas de la divulgación a presiones, ridiculización, y daño psicológico y emocional que afecta su desempeño familiar, escolar o profesional.

Por esto, es menester reconocer y atender los casos en los que uno de los integrantes objeto de la publicación utilice cualquier material, ya sea fotos, videos o cualquier otro formato que contenga imágenes de relaciones íntimas o de la persona, que no hayan sido creadas con la intención de pornografía, sea divulgada o compartida con un tercero y se utilice para tales propósitos.

Esta práctica ha cobrado notoriedad entre celebridades con videos “robados” o fotos que se filtran con la única intención de hacer daño o mancillar la dignidad de la persona expuesta. No obstante, esta práctica no es exclusiva de la farándula, sino que igualmente se ve en la vida del ciudadano común. Por esto, es de vital importancia que esta Asamblea Legislativa tome acciones para prevenir y penalizar este tipo de práctica que menoscaba la dignidad de las personas en el aspecto más íntimo de sus vidas.

Este tipo de legislación no es novel ni único, sino que se ha estado trabajando en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos de América. Al presente, cuarenta y ocho (48) estados, Washington D.C. y Guam han tomado un paso de vanguardia en cuanto a este tema aprobando legislación a esos fines. Es deber de esta Asamblea Legislativa atemperar nuestro ordenamiento jurídico a las nuevas realidades sociales, y por ello, entendemos apremiante aprobar legislación a estos fines.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.-Esta Ley se conocerá como “Ley Contra la Venganza Pornográfica de Puerto Rico”.

Artículo 2.-Declaración de Política Pública

Es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico condenar cualquier tipo de divulgación o publicación sin autorización de material explícito de carácter íntimo, por entender que esto constituye una intromisión indebida y violación a la protección contra ataques abusivos a la honra, la reputación, la vida privada y familiar, consagrados en nuestra Constitución.

Esta deplorable conducta perjudica a un sinnúmero de personas y es deber del Estado proveer las herramientas necesarias que contribuyan a prevenir y erradicar dicha conducta.

Artículo 3.-Definiciones

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

- (a) "Comunicaciones electrónicas"- Se refiere a los correos electrónicos, comunicaciones escritas o conversaciones vía aplicaciones (Apps), video-llamadas, mensajes de texto (SMS), mensajes MMS, chats, mensajería instantánea, transmisiones inalámbricas ya sea por IRDA, Bluetooth, WIFI, redes sociales, páginas de Internet o por cualquier otro método electrónico mediante el cual una parte reciba o envíe información.
- (b) "Material Explícito"- Todo material de contenido íntimo o sexual que incluya alguna imagen del cuerpo humano o sus partes; o sexualmente explícito que incluya algún tipo de actividad sexual; íntima o de pareja, ya sea visual, ilustrativo o gráfico, grabaciones de video o audio.
- (c) "Medio de comunicación electrónica o cibernética"- Incluye, pero no se limita a: IRDA, Bluetooth, WIFI, celulares, computadoras, tabletas o cualquier otro dispositivo con el que puedan enviarse comunicaciones electrónicas; así como herramientas de comunicación, tales como, redes sociales, mensajes de texto, chats, mensajería instantánea y páginas de Internet.

Artículo 4.-Conducta delictiva; Penalidades

Toda persona que, sin autorización de la víctima, a propósito o con conocimiento menoscabe la intimidad de esta, difunda, divulgue, revele o ceda a un tercero o terceros material explícito de la víctima, mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo comunicaciones electrónicas o utilizando medios de comunicación electrónica o cibernética, incurrirá en delito grave y será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar agravantes, la pena podrá ser aumentada hasta cinco (5) años de reclusión. De mediar atenuantes, la pena podrá ser reducida hasta un (1) año de reclusión.

De constituirse la conducta descrita en el párrafo anterior, para amenazar, extorsionar o buscar cualquier lucro personal, se incurrirá en delito grave que será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años. Del convicto ser reincidente en esta modalidad, el Tribunal ordenará su inscripción en el Registro de Personas Convictas Por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores como Ofensor Sexual Tipo I.

A los fines de este Artículo, el que una persona envíe o intercambie una imagen, audio, video o cualquier otro material mediante el uso de cualquier dispositivo electrónico a través de cualquier medio, no significa una renuncia a la expectativa razonable de privacidad e intimidad de la víctima. Lo dispuesto en este Artículo incluye aquel material que ha sido falsificado, modificado o alterado a los mismos fines.

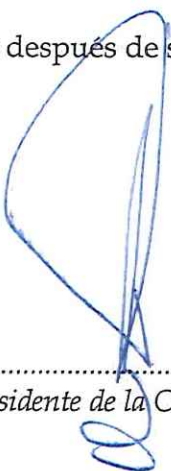
Quedan excluidos de este Artículo los servicios interactivos informativos, sistemas, o proveedores de software que suministren, activen o habiliten el acceso de múltiples usuarios a un equipo servidor, incluyendo un sistema que provea acceso a la Internet, por el contenido colocado por otra persona.

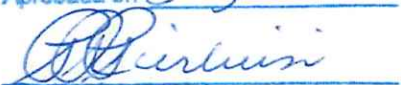
Se dispone que la conducta delictiva descrita en este Artículo prescribirá a los diez (10) años.

Artículo 5.-Si cualquier artículo, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de la Ley, quedando sus efectos limitados a la sección, apartado, párrafo, inciso, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inconstitucional.

Artículo 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.


.....
Presidente del Senado


.....
Presidente de la Cámara

Aprobada en 5 agosto 2021

.....
Gobernador

Este P. de C Núm 547

Fue recibida por el Gobernador

Hoy 8 de Julio

De 2021 A las 3:53 P.M


Asesor



LEY 33 -20 21

SENADO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO 00901

Yo, **Yamil Rivera Vélez**, Secretario del Senado de Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que el **P. del S. 11**, titulado:

“LEY

Para enmendar el Artículo 1 y añadir un inciso (t) al Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”, para aclarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, real o percibida, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio; y a los fines de establecer que los funcionarios del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito.”

ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes en la forma que expresa el ejemplar que se acompaña.

PARA QUE ASI CONSTE, y para notificar al Gobernador de Puerto Rico, expido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico, el día veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintiuno y estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico.


Yamil Rivera Vélez
Secretario del Senado

ANEJO E

Este P. de 5 Núm 11

Fue recibida por el Gobernador

Hoy 16 de agosto

De 2021 A las 1:54 P.M.


asesor

(P. del S. 11)

LEY

Para enmendar el Artículo 1 y añadir un inciso (t) al Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley para establecer la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito", para aclarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a todas las víctimas y testigos de delito, sin importar su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, real o percibida, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio; y a los fines de establecer que los funcionarios del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito", se estableció una política pública dirigida a proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos en los procesos judiciales y en las investigaciones que se realicen a raíz de la comisión de actos delictivos. En dicho estatuto se consagran varios derechos con el fin de proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos.

Siguiendo los principios constitucionales de igual protección de las leyes y la inviolabilidad de la dignidad del ser humano, esta medida establece que la política pública sobre la protección de las víctimas de delito y a los testigos de delito, aplica sin importar la edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio de la víctima o testigo.

De igual manera, esta medida da un paso adicional para salvaguardar los derechos de los testigos y víctimas de delito sin importar su estatus migratorio. La población inmigrante participa de todos los aspectos de nuestra sociedad y se ven igualmente afectados por problemáticas sociales como la criminalidad. Sin embargo, muchos(as) inmigrantes no informan actos delictivos de los que han sido víctimas, no buscan ayuda para reparar sus agravios, ni ofrecen información a las autoridades de orden público, principalmente por temor a que ello tenga repercusiones sobre su condición migratoria y ponga en riesgo su permanencia en el país y la estabilidad de su núcleo familiar. En ese sentido, esta medida establece que los(las) funcionarios(as) del orden público no podrán indagar sobre la nacionalidad o estatus migratorio de las víctimas y testigos de delito, como una garantía adicional en favor de la población inmigrante.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 1 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, para que lea como sigue:

“En armonía con la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proveer protección y asistencia a las víctimas y testigos en los procesos judiciales y en las investigaciones que se realicen declarada en virtud de la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, se adopta la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito.

Para propósitos de esta Ley, se considerará como víctima toda persona, independientemente de su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio, que sufra daño, enfermedad o muerte, como resultado directo de la comisión de cualquier delito tipificado como tal en nuestro ordenamiento. Se considerará testigo a toda persona, independientemente de su edad, raza, color, sexo, condición física o mental, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, orientación sexual, identidad de género, condición social, origen social, origen nacional, ciudadanía o estatus migratorio, en cuya presencia se haya cometido cualquier delito tipificado como tal en nuestro ordenamiento. También se considerará funcionario(a) del orden público a aquella persona que tiene a su cargo proteger a las personas, la propiedad y mantener el orden y la seguridad pública. Esto incluye, pero sin limitarse a, todo integrante del Negociado de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, integrantes del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública y Alguaciles de la Rama Judicial.” Se considera también funcionario o funcionaria del orden público de carácter limitado a todo empleado o empleada público estatal, con autoridad expresa en ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones y responsabilidades especiales.

Sección 2.- Se añade un inciso (t) al Artículo 2 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, para que lea como sigue:

“Artículo 2.- Toda persona que sea víctima o testigo de delito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá derecho a:

(a) ...

...

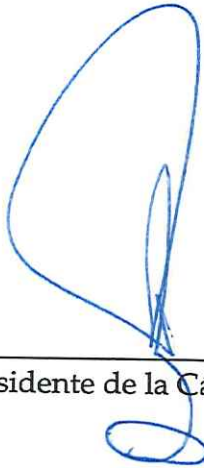
(s) ...

(t) A no ser cuestionado(a) sobre su nacionalidad o estatus migratorio al momento de informar la comisión de un delito, durante y posterior a cualquier etapa del proceso criminal, o al sostener cualquier comunicación y/o trámites con agencias que integran el sistema de justicia criminal.

Disponiéndose que, en tales casos, todo funcionario(a) del orden público, incluyendo, pero sin limitarse a, todo integrante de la Policía de Puerto Rico y de la Policía Municipal, integrantes del Cuerpo de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales, agentes del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública y Alguaciles de la Rama Judicial tendrá la obligación de garantizar que se provea todo servicio o derecho que le corresponda a esa víctima y/o testigo de delito.

Disponiéndose además que, cada una de las agencias sujetas al cumplimiento de esta Ley vendrán obligadas a llevar a cabo talleres de capacitación a todo su personal. Además, deberán crear en conjunto material educativo dirigido a toda la comunidad, disponible por medios electrónicos y en las inmediaciones físicas de cada agencia.”

Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.



Presidente de la Cámara



Presidente del Senado

Aprobada en 27 agosto 2021



Gobernador



LEY 37 -20 21

SENADO

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

EL CAPITOLIO
SAN JUAN, PUERTO RICO 00901

Yo, **Yamil Rivera Vélez**, Secretario del Senado de Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que el **P. del S. 135**, titulado:

“LEY

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo”, a los fines de establecer que en los casos donde se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres (3) Ramas -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, así como de los gobiernos municipales, por actos de hostigamiento sexual en el empleo, estos podrán exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas; y para otros fines relacionados.”

ha sido aprobado por el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes en la forma que expresa el ejemplar que se acompaña.

PARA QUE ASI CONSTE, y para notificar al Gobernador de Puerto Rico, expido la presente en mi oficina en el Capitolio, San Juan, Puerto Rico, el día veintinueve (29) del mes de junio del año dos mil veintiuno y estampo en ella el sello del Senado de Puerto Rico.


Yamil Rivera Vélez
Secretario del Senado

ANEJO F

Este P. de 5 Núm 135

Fue recibida por el Gobernador

Hoy 16 de agosto

De 2021 A las 1:54 P.M.

Carlin
Asesor

(P. del S. 135)

LEY

Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo", a los fines de establecer que en los casos donde se adjudique responsabilidad solidaria y vicaria al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres (3) Ramas -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades y corporaciones públicas, así como de los gobiernos municipales, por actos de hostigamiento sexual en el empleo, estos podrán exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Confusión, duda, sentimientos de culpa, ansiedad, depresión, dificultad para volver a creer o tener confianza sobre las demás personas y miedo, son solo algunos de los efectos devastadores sobre la persona que experimenta la tragedia del hostigamiento sexual. No importa cuánto tiempo pase, ni los procedimientos de terapia, la vida queda marcada para siempre. Esa dura realidad no solo requiere el establecer y velar por una política pública clara de orientación y prevención, también amerita pasar revista sobre legislación aprobada sobre el tema para atemperarla y crear nuevas disposiciones con relación al tema.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo 2, Sección 1, establece que: "La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas..." Consistente con lo anterior, se proponen enmiendas a la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo", con el fin de aclarar que cualquier acto de hostigamiento sexual en el empleo, donde se requiera realizar el pago de un importe por daños, la persona, patrono o supervisor deberá utilizar recursos del propio peculio para indemnizar a la víctima. Prohibiéndose la erogación de fondos públicos para atender estas reclamaciones.

No debe haber duda al momento de reafirmar que el hostigamiento sexual en el empleo es un acto repudiable e inaceptable, cuyos efectos emocionales y psicológicos sobre la dignidad del ser humano son incalculables, a tales fines se presenta esta legislación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmienda el Artículo 11 de la Ley Núm. 17 del 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como "Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo", para que lea como sigue:

"Artículo 11- Sanciones.

Toda persona responsable de hostigamiento sexual en el empleo según se define en esta Ley, incurrirá en responsabilidad civil:

(1) ...

(2) ...

En la sentencia que se dicte en acciones civiles interpuestas bajo las precedentes disposiciones, el Tribunal podrá ordenar al patrono que emplee, promueva o reponga en su empleo al empleado y que cese y desista del acto que se trate.

En aquellos casos donde se adjudique la responsabilidad solidaria y vicaria del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cada una de sus tres Ramas-Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, sus instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios, estas podrán exigir la restitución, nivelación o reembolso de todos los fondos públicos pagados a las víctimas por los actos de hostigamiento sexual.

Cualquier sentencia y/o estipulación será pública y contendrá un acuerdo o plan de pago entre la persona que incurrió, o se alega incurrió, en conducta constitutiva de hostigamiento sexual y el Gobierno, agencia, municipio o corporación pública sujeta al pago con fondos públicos de la sentencia para hacer efectiva la restitución, nivelación o reembolso de los mismos."

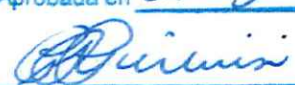
Sección 2.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.



Presidente de la Cámara



Presidente del Senado

Aprobada en 27 agosto 2021

 Gobernador



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora

Sra. Iris Santos Díaz
Directora

8 de julio de 2020

MEMORANDO ESPECIAL NÚM. 014-2020

A: Secretarios, Directores, Jefes de Agencias, Departamentos, Corporaciones Públicas, Oficinas, Comisiones, Administraciones, Organismos y demás instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, Presidentes del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, y Jueza Presidenta del Tribunal Supremo


DE: Iris E. Santos Díaz
Directora

RE: ENMIENDA A LAS GUIAS Y DIRECTRICES PARA LA ELEGIBILIDAD Y DISTRIBUCION DEL "CORONAVIRUS RELIEF FUND", A AGENCIAS, DEPARTAMENTOS, CORPORACIONES PÚBLICAS, OFICINAS, COMISIONES, ADMINISTRACIONES, ORGANISMOS Y DEMÁS INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA Y LA RAMA LEGISLATIVA Y JUDICIAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO (EN ADELANTE ENTIDAD, ENTIDADES)

I. BASE LEGAL

Este Memorando Especial se emite en virtud de las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP), mediante la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Asimismo, se emite a tenor con las disposiciones de la Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, OE-2020-040, para adoptar el plan estratégico para el desembolso de los fondos asignados a Puerto Rico, a través del "Coronavirus Relief Fund" (CRF), establecido mediante la Ley Federal conocida como "Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act" (CARES).

ANEJO G

II. PROPÓSITO

Las disposiciones de este Memorando Especial tienen el propósito de:

1. Enmendar y clarificar el calendario sobre el proceso de distribución de los fondos CRF dispuesto en el Memorando Especial 011-2020.
2. Incluir un nuevo acápite 8 y reenumerar el 8 y 9 como 9 y 10 de la parte IV Disposiciones Generales del Memorando Especial 011-2020 a fin de disponer que el proceso de compras se realizará según establecido por la Administración de Servicios Generales.
3. Enmendar el contenido de la Certificación que se debe acompañar con la solicitud de aprobación de fondos. Anejo 1.

Con excepción de las enmiendas antes descritas, el propósito y contenido del Memorando Especial 011-2020 queda inalterado. Este es promulgar las directrices necesarias para la elegibilidad, distribución, transferencia y contabilización de los fondos asignados mediante un "Plan Estratégico para el Desembolso de los Fondos del CRF", como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Lo anterior, en estricto cumplimiento con las guías emitidas por el Departamento del Tesoro Federal y las normativas gubernamentales existentes en Puerto Rico para asegurar que el desembolso de los fondos del Programa esté sujeto a los más estrictos estándares de cumplimiento con las regulaciones federales y las mejores prácticas fiscales y legales. Así las cosas, es importante destacar que cada solicitud de desembolso deberá estar debidamente documentada ya que estará sujeta a los procesos de control y auditoría correspondientes.

III. APLICABILIDAD

Las disposiciones del presente Memorando Especial aplicarán a todas las agencias, departamentos instrumentalidades, corporaciones públicas, oficinas, comisiones, administraciones, organismos y demás entidades adscritas a la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

1. Fechas relacionadas al proceso de distribución de los fondos CRF

1 de junio de 2020	Comienza el periodo de solicitud. Las solicitudes deben ser radicadas a través de la aplicación del sistema de planteamientos PP, junto con una certificación firmada.
Desde el 1 de junio de 2020 hasta agotarse los fondos	Periodo de revisión y aprobación de solicitudes por el Programa.

31 de agosto de 2020	Presentación del Informe de Uso de Fondos y Pruebas de Gastos para el período del 1 de marzo de 2020 al 31 de julio de 2020 a la AAFAF, por parte del Receptor.
30 de diciembre de 2020	Fecha límite para que los Fondos sean Gastados/Desembolsados por los Destinatarios.
31 de enero de 2021	Presentación del informe de fondos y la evidencia de gastos a la AAFAF, por parte del recipiente de los fondos.
1 de febrero al 30 de abril de 2021	Auditoría del Uso del Cumplimiento y Recuperación de Fondos, por parte del Programa Federal y la AAFAF.
1 de mayo de 2021	Cierre del programa.

2. Auditoras

La OGP estará realizando auditorias continuas mientras dure el programa.

3. Criterios de Elegibilidad y Gastos Elegibles y No Elegibles por Programa

Para el detalle de los criterios de elegibilidad y los gastos elegibles y no elegibles por programa, las entidades gubernamentales deberán consultar la Guía publicada por el Tesoro de los Estados Unidos en <https://home.treasury.gov/policy-issues/cares/state-and-local-governments> y las Preguntas Frecuentes publicadas por el Tesoro de los Estados Unidos en <https://home.treasury.gov/system>.

Asimismo, tendrán acceso a más información sobre formularios, documentos y elegibilidad a través de la web en <http://www.aafaf.pr.gov/covid-19-resource-center.html> y <http://www.ogp.pr.gov>.

4. Solicitud de aprobación de fondos del Coronavirus Relief Fund ("CRF")

La persona autorizada por la Autoridad Nominadora de cada entidad gubernamental presentará las solicitudes correspondientes de manera electrónica, utilizando la aplicación de procesamiento de planteamientos (PP). Esta aplicación se puede acceder a través de la siguiente dirección: <https://pp.ogp.pr.gov>.

Las solicitudes se deberán presentar bajo la Plantilla tipo Otros denominada "Solicitud de Fondos CFR".

Al presentar su solicitud en la aplicación PP, los oficiales de la Entidad Gubernamental la acompañarán con la justificación correspondiente, cotización y/o orden de compras y la certificación firmada (Véase Anejo 1).

5. Fecha en que se hará disponible la aplicación para la solicitud de estos fondos:

La aplicación estará disponible para comenzar el proceso de solicitud el 1 de junio de 2020 y permanecerá abierta hasta que los fondos estén disponibles o hasta el 30 de diciembre de 2020, lo que ocurra primero. Todas las solicitudes serán aceptadas, siempre y cuando se sometan dentro del marco de tiempo antes señalado. Asimismo, serán evaluadas de acuerdo con los criterios establecidos por cada Programa.

6. Evaluación

Las decisiones de adjudicación de fondos serán supervisadas por el Comité de Supervisión del Desembolso (Comité). Cada Solicitud será evaluada, y los fondos del Programa se asignarán usando el estándar de necesidad correspondiente.

El Comité examinará las solicitudes a medida que se presenten.

7. Otorgación de Fondos

Los solicitantes serán notificados por correo electrónico y recibirán una carta de aprobación, que se emitirá a través de la aplicación del sistema de planteamientos (PP).

8. Proceso de Compras

El Proceso de compras se realizará según lo establecido por la Administración de Servicios Generales (ASG).

9. Procedimiento de Contabilidad de los Fondos Asignados mediante *Coronavirus Relief Fund* (CRF)

Los fondos serán reconocidos en un Fondo Especial (245), según establece el Esquema de Cuentas de la OGP.

Los fondos serán reconocidos en el Fondo 245 bajo el año 2020. Deben incorporar en la cifra de cuenta el número de agencia y la asignación de gastos.

Cifra de cuenta: 245-xxxxxxx-xxx-2020
Fondo - núm. agencia-asignación-año

Para mantener una sana administración fiscal, se recomienda que la entidad adopte todos aquellos mecanismos de control interno necesarios para el buen uso de estos fondos y evitar cualquier señalamiento posterior en una auditoría.

Para más información, puede comunicarse mediante el siguiente correo electrónico cares@ogp.pr.gov correspondiente a su Entidad.

10. Cumplimiento

Cualquier entidad recipiente de los fondos de los Programas deberá retener evidencia de gastos elegibles por un período de diez (10) años. Además, al aceptar los fondos del CRF, el recipiente está obligado a certificar el uso adecuado y legal de los mismos y se compromete a cooperar en cualquier procedimiento de auditoría solicitado por el Gobierno de Puerto Rico u otra entidad responsable.

V. VIGENCIA

Las disposiciones de este Memorando Especial tendrán vigencia inmediata a partir de su aprobación, y se mantendrán vigentes hasta el cierre del Programa el 1 de mayo de 2021.



GASTOS ELEGIBLES CONFORME AL PLAN ESTRATÉGICO DE DESEMBOLSOS DEL CORONAVIRUS RELIEF FUND DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

El Plan Estratégico de Desembolsos del Coronavirus Relief Fund ("CRF") del Gobierno de Puerto Rico fue adoptado por la Hon. Wanda Vázquez Garced mediante el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-040. Dicho plan establece, entre otras cosas, varias medidas dirigidas a atender la emergencia ocasionada por el COVID-19. A su vez, estas iniciativas fueron desarrolladas conforme a las disposiciones de la ley federal conocida como Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security ("CARES") y a las guías emitidas por el Departamento del Tesoro Federal.

Dicho Plan contempla, entre otros, fondos para los siguientes programas, iniciativas y medidas ("Programas"), a los cuales las Entidades Gubernamentales pueden acceder para cubrir gastos elegibles:

	PROGRAMAS	CUANTÍA
1	Distanciamiento Social, Compra de Equipo de Protección y Materiales	\$100,000,000.00
2	Pruebas de COVID-19 y Programas de Rastreo de Contactos (aplica solo al Departamento de Salud)	\$150,000,000.00
3	Programa de Telemedicina (aplica solo al Departamento de Salud)	\$40,000,000.00
4	Programa de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico	\$40,000,000.00
5	Programa de Ayuda a Personas sin Hogar ante Emergencia de COVID-19	\$5,000,000.00
6	Gastos relacionados a COVID-19 en las prisiones (aplica solo al Departamento de Corrección y Rehabilitación)	\$10,000,000.00

Al presentar su solicitud, los oficiales de la Entidad Gubernamental reconocen y certifican lo siguiente:

- 1) que han leído, entienden y aceptan las disposiciones aplicables del Boletín Administrativo OE-2020-040, incluyendo sus anejos; el CARES ACT y las guías emitidas por el Departamento del Tesoro Federal respecto al CRF. Disponibles en las páginas de AFFAF y OGP;
- 2) que los fondos solicitados son para gastos elegibles relacionados al COVID-19, conforme a las normas aplicables;
- 3) que dichos fondos serán utilizados para cubrir gastos no presupuestados, incurridos y desembolsados entre marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020;
- 4) que no ha recibido, ni solicitará en futuro recibir compensación estatal, federal o privada (seguros) por los gastos para los cuales se solicitan fondos;
- 5) que brindará cualesquiera documentos o información que el Gobierno de Puerto Rico, la AAFAF, sus instrumentalidades, la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro Federal y/o cualquier otra entidad gubernamental con jurisdicción o competencia soliciten como parte de un programa de fiscalización, cumplimiento, monitoreo o auditoría de estos fondos
- 6) que en caso de determinarse que esta solicitud ha sido presentada de forma fraudulenta o en contravención a cualquier ley, reglamento u norma aplicable, devolverá total o parcialmente los fondos recibidos.

En San Juan, Puerto Rico a ____ de _____ de 2020

Nombre y Firma
Director(a) de Finanzas o Presupuesto

Nombre y Firma
Jefe(a) de Agencia o Representante Autorizado



GOBIERNO DE PUERTO RICO

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Director | Juan Carlos Blanco | juan.blanco@ogp.pr.gov

18 de agosto de 2021

MEMORANDO ESPECIAL NÚM. 013-2021

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Secretarios, Directores, Jefes de Agencias, Departamentos; Corporaciones Públicas, Oficinas, Comisiones, Administraciones, Organismos y demás instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico, Presidentes del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes y Jueza Presidenta del Tribunal Supremo

Lcdo. Juan Carlos Blanco

Director

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, TRANSFERENCIA Y CONTABILIZACIÓN DE LOS FONDOS ASIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚM. 144 AL COMITÉ PARE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL BOLETÍN ADMINISTRATIVO NÚM. OE-2021-013.

I. BASE LEGAL

Esta normativa se emite en virtud de las facultades conferidas a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (en adelante, OGP), mediante la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Asimismo, se emite a tenor con el Boletín Administrativo Núm. OE-2021-013 del 25 de marzo de 2021, en el cual se establece un estado de emergencia en Puerto Rico dada el alza en los casos de violencia de género y a su vez crea el Comité PARE (PARE), para asesorar y recomendar al Gobernador las medidas necesarias para implementar y dar cumplimiento a la normativa establecida en dicha orden ejecutiva.

II. PROPÓSITO

Establecer el procedimiento para la solicitud, transferencia y contabilización de los fondos asignados al Comité PARE, asegurando que la transferencia de los fondos esté sujeta a las mejores prácticas de administración y responsabilidad fiscal.

ANEJO H

Calle Cruz #254 Esq. Tetuán, San Juan, PR / PO Box 9023228, San Juan, PR 00902-3228



787-725-9420



www.ogp.pr.gov

III. APLICABILIDAD

Las disposiciones normativas aplicarán a todas las agencias, departamentos instrumentalidades, corporaciones públicas, oficinas, comisiones, administraciones, organismos y demás entidades adscritas a la Rama Ejecutiva, Legislativa y Judicial del Gobierno de Puerto Rico.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

1. Las solicitudes de fondos serán sometidas a través de la plataforma electrónica de Procesamiento de Planteamientos (PP).
2. La Plantilla que se debe utilizar para la solicitud está nombrada como: "Solicitud de Fondos" en su título deberán escribir FONDOS PARE.
3. Al presentar la solicitud en la plataforma PP, acompañarán la misma con la Resolución del Comité PARE otorgando los mismos, justificación y desglose del uso de los fondos y cotización y/o orden de compras. La OGP se reserva el derecho de requerir cualquier otro documento que entienda necesario.
4. Los PP serán presentados por la OGP ante la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) de acuerdo con el procedimiento particular acordado entre ambas partes para estas solicitudes en cumplimiento con la Resolución Conjunta Núm. 144.
5. Las agencias solicitantes serán notificadas mediante el correo electrónico que se genera a través de la plataforma PP en el proceso de aprobación. Además, podrán obtener la Carta de Aprobación accediendo a la sección de documentos dentro del PP.
6. Los fondos aprobados serán reconocidos en una asignación englobada dentro del presupuesto asignado mediante la Resolución Conjunta Núm. 144 para el año fiscal 2022 y de conformidad con el Esquema de Cuentas de la OGP.
7. La entidad deberá adoptar mecanismos de control interno necesarios para garantizar una sana administración fiscal de los fondos transferidos. Además, el uso de los fondos asignados deberá regirse por las leyes y reglamentos aplicables.
8. Cualquier entidad recipiente de los fondos del Programa PARE deberá conservar evidencia de los gastos realizados por un período de diez (10) años. Al aceptar los fondos, el recipiente está obligado al uso adecuado y legal de los mismos y se compromete a cooperar en cualquier procedimiento de auditoría solicitado por el Gobierno de Puerto Rico u otra entidad responsable.

V. VIGENCIA

Las disposiciones de este Memorando Especial tendrán vigencia inmediata.